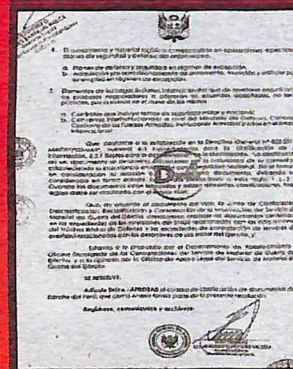
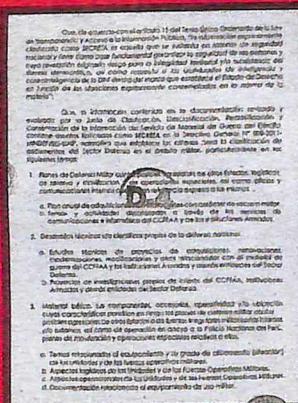
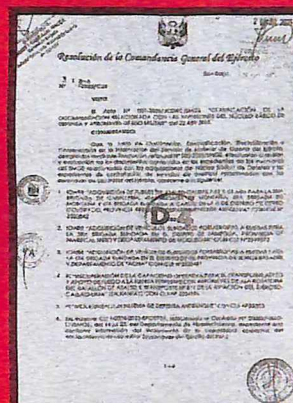


HILDEBRANDT

En sus trece



ANEXO

CRONOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL EJERCITO DEL PERU

Nº	CONTENIDO	CLASIFICACIÓN
1	ORDEN DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL EJERCITO DEL PERU	SECRETO
2	ORDEN DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL EJERCITO DEL PERU	SECRETO
3	ORDEN DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL EJERCITO DEL PERU	SECRETO
4	ORDEN DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL EJERCITO DEL PERU	SECRETO
5	ORDEN DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL EJERCITO DEL PERU	SECRETO
6	ORDEN DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL EJERCITO DEL PERU	SECRETO
7	ORDEN DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL EJERCITO DEL PERU	SECRETO
8	ORDEN DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL EJERCITO DEL PERU	SECRETO
9	ORDEN DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL EJERCITO DEL PERU	SECRETO
10	ORDEN DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL EJERCITO DEL PERU	SECRETO

Secretos que apestan

► Imitando al fujimorismo más saqueador, el Ejército decreta que sus adquisiciones y contratos de mantenimiento o repotenciación son ahora inaccesibles al control del Estado, a las investigaciones del Ministerio Público o a los escrutinios de la prensa independiente

(4, 5 y 30)

El hombre y la banda

► 79 páginas de un documento procedente del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) describen las actividades del ministro Juan José Santiváñez como las de un auténtico gánster

(2, 3 y 30)



La tortaza de los medios

(8 y 9)

El hombre y la banda

► 79 páginas de un documento procedente del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) describen las actividades del ministro Juan José Santiváñez como las de un auténtico gánster

FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13



A Nicanor Boluarte se le fabricaron contratos ficticios como asesor de una minera para acreditar arraigo laboral y evitar una medida de prisión preventiva.

Juan José Santiváñez juramenta como ministro de Justicia y Derechos Humanos el sábado 23. Mutua protección.

AMÉRICO ZAMBRANO

El contraste no podía ser más sorprendente. Cuatro días después de jurar como ministro de Justicia, Juan José Santiváñez era señalado en una resolución judicial como el “hombre clave” de una organización criminal, mientras un grupo de fiscales allanaba las oficinas de sus socios y la vivienda de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta.

A él no lo tocaron: su con-

poder de este semanario, habría utilizado el Ministerio del Interior, primero, y una oficina en Palacio de Gobierno, después, para montar la que es descrita como una telaraña criminal con abogados de confianza, generales de la Policía y empresarios mineros.

La Fiscalía lo acusa de haber intervenido en contrataciones amañadas para defender a oficiales procesados por la represión de las protestas de 2020, de cobrar por la permanencia de mandos policiales y de favorecer



dición de aforado lo protege. Pero la trama política ya estaba trazada. El mismo funcionario que recientemente prometió “reformular el sistema de justicia” y “ejercer control absoluto sobre los penales”, aparece señalado por la Fiscalía como el jefe de una red que cobraba sobornos, fabricaba arraigos laborales para asegurar la libertad de aliados y encubría a sus propios operadores.

En una entrevista con “Expreso”, su diario favorito, Santiváñez habló de soberanía, de cortar con la “intromisión” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de “cárceles seguras”. En privado, según el documento de 79 páginas en

a una minera en Ayacucho a cambio de dinero y favores para Nicanor Boluarte. El nuevo ministro de Justicia es, para la Fiscalía, un hampon con fajín.

El allanamiento del miércoles, que alcanzó a las oficinas del abogado Percy Tenorio, en San Isidro y Camacho, a la Defensoría de la Policía y a dependencias regionales en Ayacucho, dibuja un mapa de poder paralelo.

No se allanó la oficina que Santiváñez dirigió en Palacio porque el Poder Judicial rechazó ese pedido. Pero el operativo refuerza la sospecha central: el abogado fue nombrado ministro de Justicia no solo para blindarse sino para desactivar las in-



Fiscales del Eficop allanan, una vez más, la vivienda de Nicanor Boluarte como parte de la llamada "Operación Ícaro".

sidenta, Nicanor Boluarte está ahí, en la fotografía de las diligencias, como un recordatorio de que la línea de fuego se acerca a Palacio de Gobierno.

El expediente describe siete visitas del hermano de la presidenta al Centro Empresarial de San Isidro, entre enero y febrero de este año. Allí se reunía con Marco Palacios Meza, socio de confianza de Santiváñez, y con el empresario minero Franco Parodi Gianella. El propósito: fabricarle contratos de asesoría ficticios en la mina "El Dorado" para acreditar un trabajo estable y evitar así una eventual prisión preventiva. Es decir, un arraigo laboral truco.

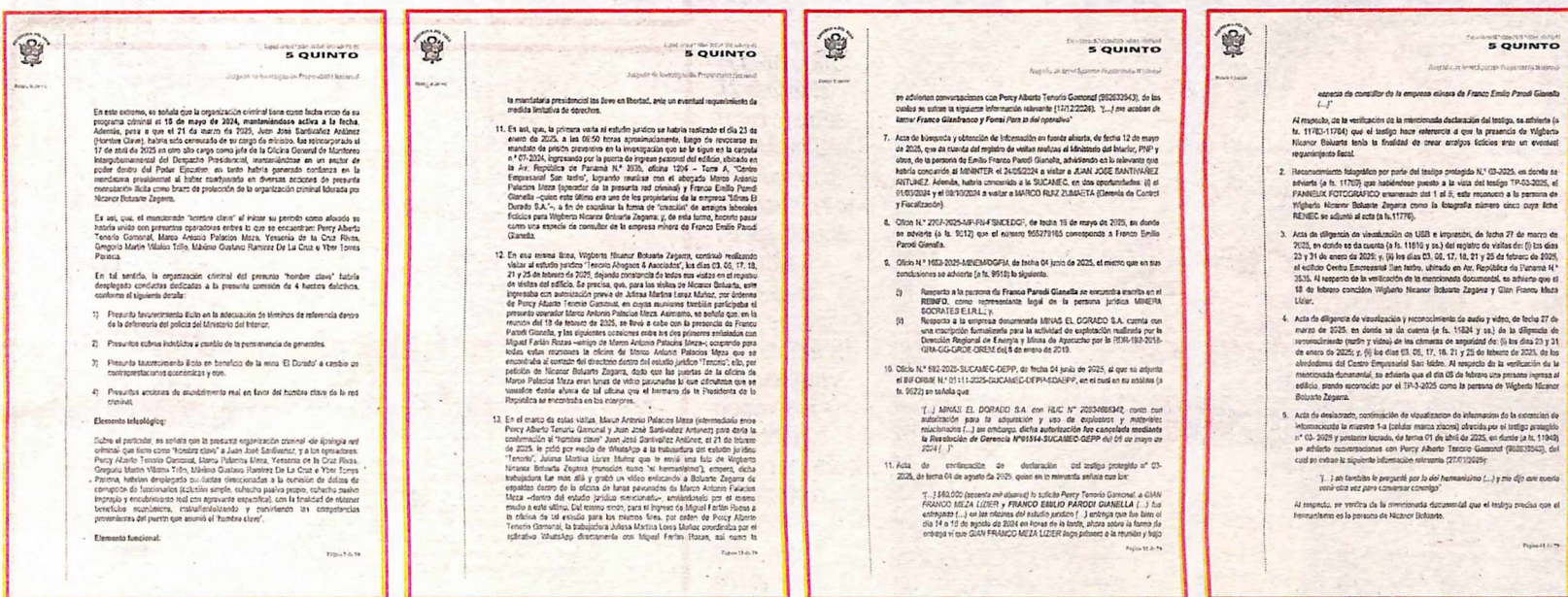
Los hechos están registrados en audios, chats y cámaras de seguridad. Los documentos revelan a un Nicanor que entra y sale de las oficinas como un visitante habitual, mientras los socios de Santiváñez discuten cuánto costará "el operativo" para recuperar la concesión minera en Ayacucho. Parte de los sobornos fueron a parar a los bolsillos de generales y operadores de la red, según colaboradores eficaces.

El blindaje a Nicanor era parte del paquete. La Fiscalía sostiene que se movía en el estudio de Tenorio, excliente de Santiváñez, como si fuera uno más de la firma, amparado por la protección de empresarios y abogados que se jugaban su propia libertad. "Todo se hizo para evitar que lo toquen", declaró un testigo protegido.

Mientras la Fiscalía expone a esta presunta organización criminal, Santiváñez intenta instalar otra narrativa: la del ministro que llegó para "reformular el sistema de justicia", a pesar de que cuando estuvo al frente del sector Interior el crimen y los asesinatos se desbordaron.

No es una idea nueva. Desde hace meses, tanto la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, como la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, han advertido que ese discurso encubre un objetivo distinto: someter a jueces y fiscales bajo el pretexto de la eficiencia. Con la llegada de Santiváñez al Ministerio de Justicia, esa sospecha parece tomar forma.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30



Cuatro de las 79 páginas de la resolución judicial que exhibe a la organización criminal liderada por el flamante ministro de Justicia.

investigaciones que alcanzan al entorno de la presidenta.

El Tribunal Constitucional ya blindó a Dina Boluarte hasta el 2026. Sus allegados, en cambio –entre ellos su hermano Nicanor y el propio Santiváñez–, siguen bajo investigaciones fiscales que parecen estrecharse cada vez más. Y es ahí donde cobra sentido su llegada a Justicia.

Según la Fiscalía, la red que rodea al ministro de Justicia comenzó a armarse mucho antes de su juramentación. El fiscal Cardos Ordaya, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficop), lo describe como "cerebro" de un grupo que funcionaba dentro y fuera del Estado.

El organigrama incluye a viejos conocidos de Santi-

váñez: el coronel en retiro Percy Tenorio Gamonal, abogado de mineros y policías; el general Gregorio Villalón Trillo, jefe de Medio Ambiente de la PNP; el exdirector de la Diroes, Marco Palacios Meza; y funcionarios de la Defensoría de la Policía como Yber Torres Pariona y el general Máximo Ramírez de la Cruz. Todos, según la hipótesis fiscal, trabajaban bajo la sombra de Santiváñez.

El expediente judicial recoge escenas que muestran cómo operaba esta red. En el estudio Tenorio, en San Isidro, se acordó el pago de 20,000 dólares para garantizar la permanencia de un general en su cargo. En chats extraídos de un celular se pedían documentos a nombre de Santiváñez

para facilitar el reingreso de oficiales corruptos. En Ayacucho, un operativo policial sirvió para asegurar el control de la mina El Dorado a cambio de un soborno de 100,000 dólares entregados por empresarios mineros. En paralelo, los favores se extendían al entorno presidencial. A Nicanor Boluarte se le fabricaron contratos ficticios como asesor de la minera para acreditar arraigo laboral y evitar una medida de prisión preventiva.

A los generales investigados por la represión de las protestas de noviembre de 2020, donde murieron Inti Sotelo y Bryan Pintado, se les aseguró una defensa legal gracias a contrataciones presuntamente amañadas en la Defensoría de la Poli-

cía. Siempre con el mismo patrón: empresarios que financiaban, policías que ejecutaban y abogados que cerraban la operación por orden de Santiváñez.

La Fiscalía estima en 180,000 dólares los pagos ilícitos ya identificados. Pero, más que el dinero, lo relevante es la estructura: una organización que compraba lealtades, manipulaba instituciones y usaba al Estado como cobertura. Es, en síntesis, la misma descripción que varios críticos atribuyen al gobierno de Dina Boluarte. "Un grupo estructurado, con capacidad operativa y carácter permanente", resume el fiscal Carlos Ordaya, a cargo del caso.

Cada vez que la Fiscalía golpea al entorno de la pre-

Secretos que apestan

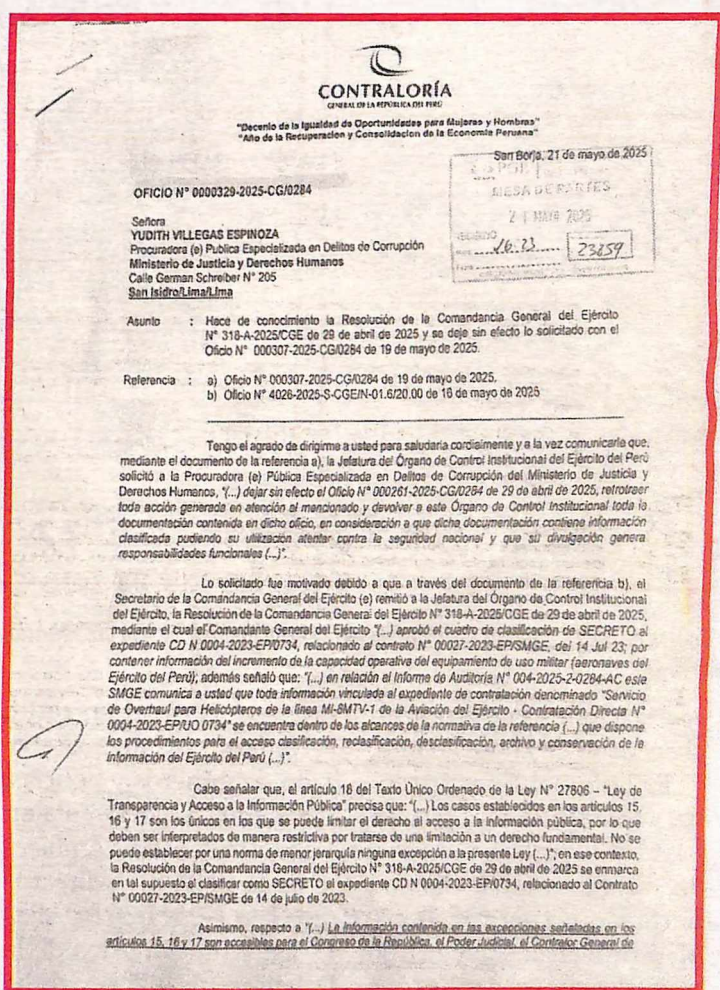
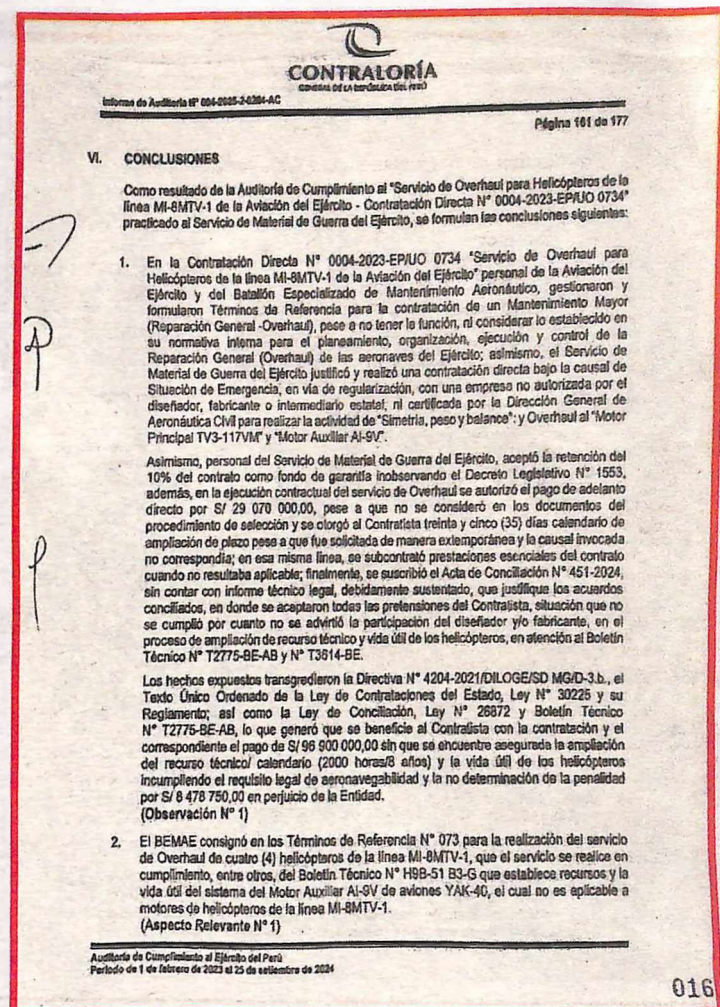
► Imitando al fujimorismo más saqueador, el Ejército decreta que sus adquisiciones y contratos de mantenimiento o repotenciación son ahora inaccesibles al control del Estado, a las investigaciones del Ministerio Público o a los escrutinios de la prensa independiente



Conclusiones de la auditoría hecha por la Contraloría al "overhaul" de los cuatro helicópteros del Ejército. Puras irregularidades: desde contratar a una empresa sin certificación hasta dar adelantos injustificados por S/29 millones. Hay responsabilidad penal en los altos mandos del Ejército.

Oficio enviado el pasado 21 de mayo por el auditor Andrés Iparraguirre a la Procuraduría Anticorrupción pidiendo archivar el informe sobre los helicópteros y no presentar la denuncia contra los militares porque la contratación había sido declarada "secreto de Estado" por el Ejército.

General César Briceño Valdivia: actual jefe del Ejército y uno de los involucrados en la contratación irregular de Helicentro para dar mantenimiento a cuatro helicópteros. Es quien optó por el secreto salvador.

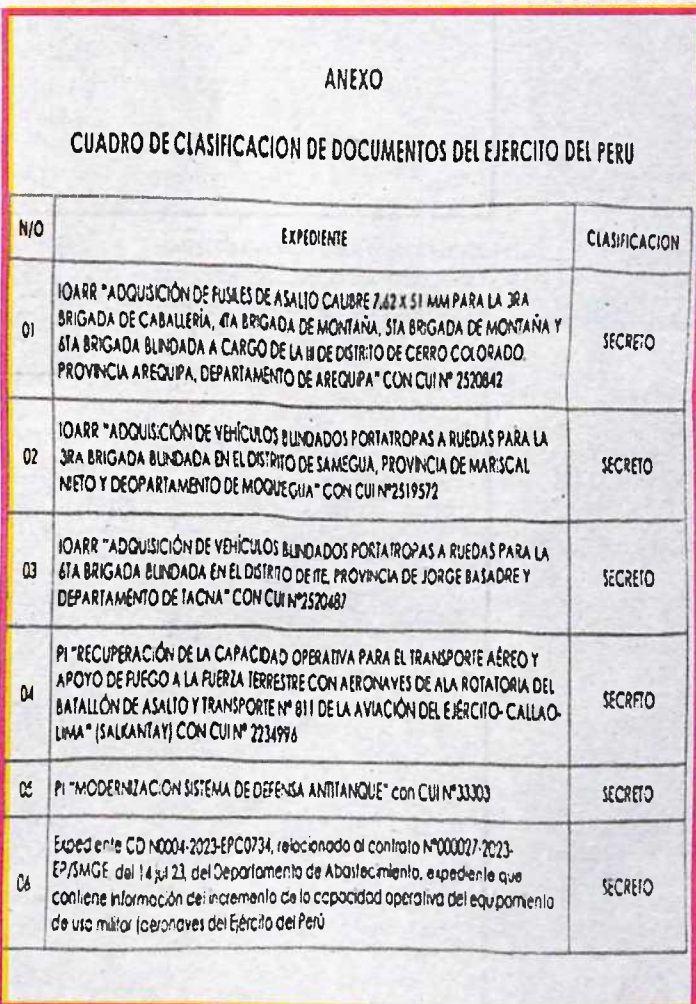
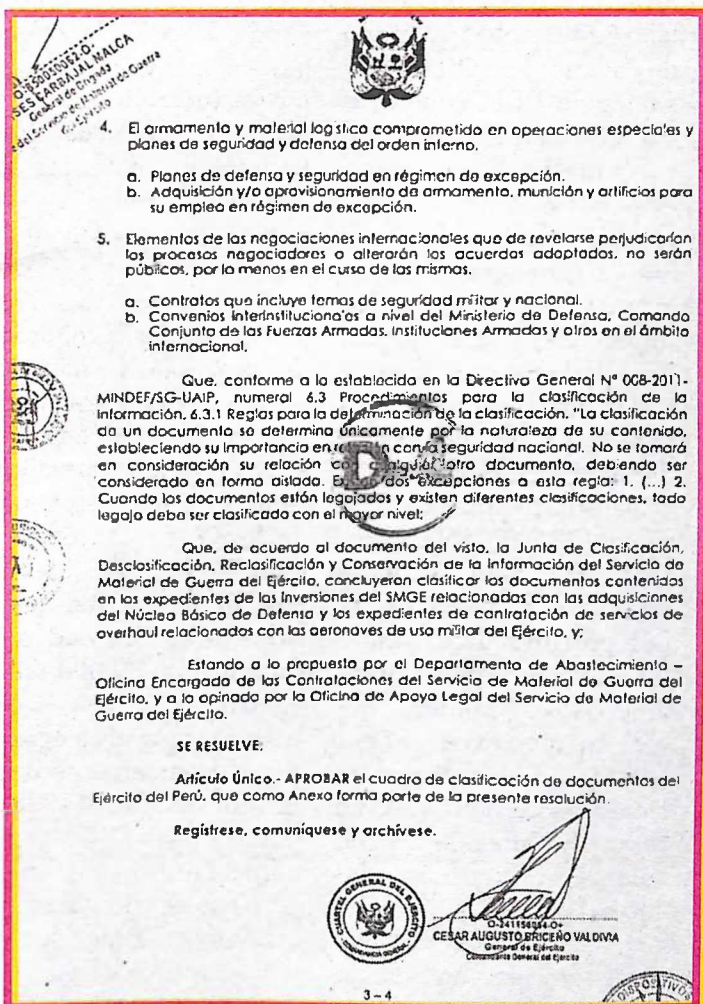
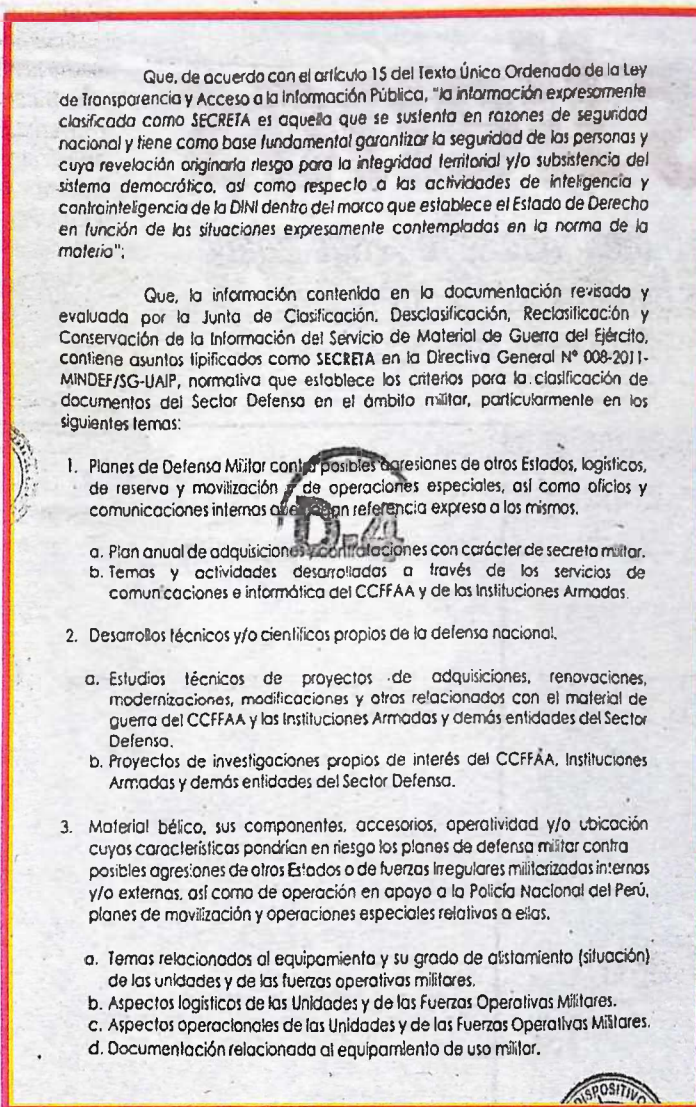
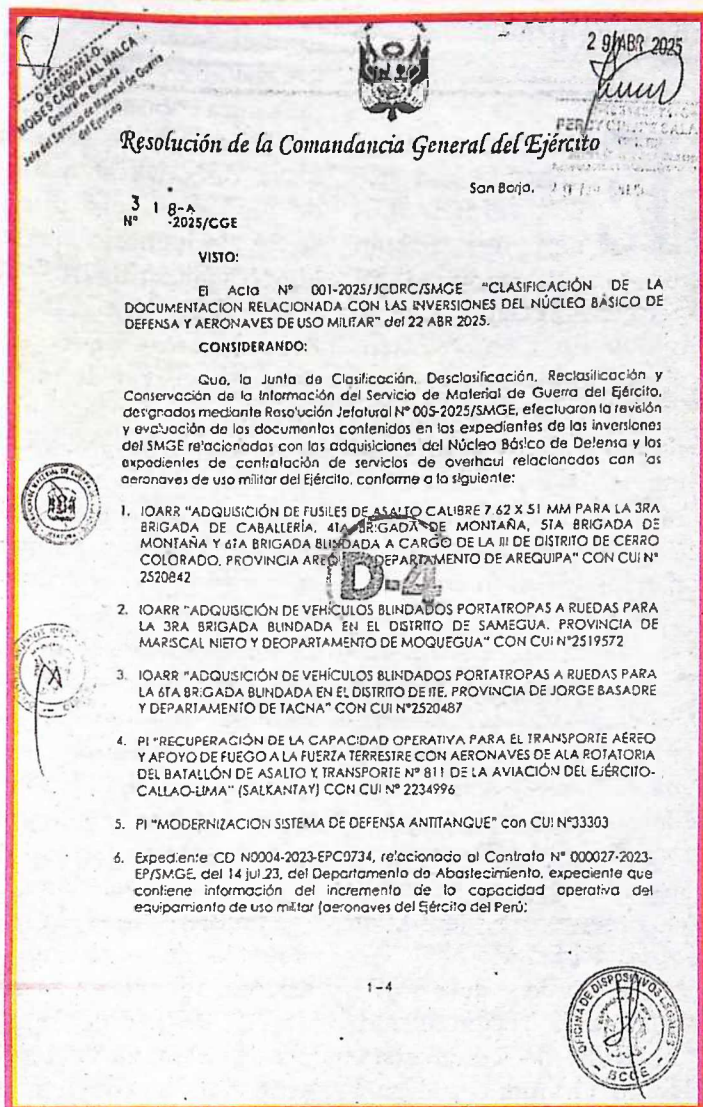


ELOY MARCHÁN

El régimen de Dina Boluarte es, oficialmente, un remedo del fujimorato. La última copiandanga ha sido declarar "secreto de Estado" las millonarias compras militares del Ejército. El objetivo es bloquear las investigaciones de la Contraloría, Fiscalía o del periodismo independiente, tal y como

lo hicieron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Este semanario accedió a la resolución de la Comandancia General del Ejército, de código 318-A-2025/CGE, que declara como "secreto" cuatro millonarias compras y contrataciones militares. Se trata de las adquisiciones de 10 mil fusiles de asalto, 30 vehículos blindados 8x8, un sistema antitanques y el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 y MI-



Las cuatro páginas de la resolución de la Comandancia General del Ejército que declaró "secreto de Estado" cinco millonarias adquisiciones hechas durante la gestión de Dina Boluarte. Un calco de lo que hizo el fujimontesinismo.

8. Entre todas, el Ejército ha gastado S/ 540 millones.

El documento, filtrado a este semanario por un alto oficial que está en desacuerdo con lo que ocurre en su institución, tiene la firma del general César Briceño Valdivia, comandante gene-

ral del Ejército. La fecha de rúbrica es del 29 de abril del 2025. Y tiene estampado el sello D-4, que en el Ejército significa que es clasificado.

"La Junta de Clasificación, Desclasificación, Reclasificación y Conservación del

cio de Material de Guerra del Ejército, concluyeron clasificar los documentos contenidos en los expedientes de las inversiones del SMGE relacionados con las adquisiciones del Núcleo Básico de Defensa y los expedientes de contratación de servicios

de *overhaul* relacionados con las aeronaves de uso militar del Ejército", se lee en la resolución.

El documento, de cuatro páginas, justifica la decisión argumentando que las compras que el Ejército ha hecho son parte de los "Planes de

Defensa Militar contra posibles agresiones de otros Estados" y buscan defender al Perú de las "fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional". La resolución no brinda más detalles.

Entre 1996 y 1998, el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos declaró "secreto" la compra de los 18 aviones MIG-29 y 18 naves Sukhoi. En la adquisición, justificada por el conflicto del Alto Cenepa con Ecuador, Fujimori y Montesinos pagaron USD 452 millones por las naves de segunda mano, cuando en realidad valían USD 158 millones.

Los detalles de la compra y los actos de corrupción no se conocieron hasta la caída del régimen. La gestión de Dina Boluarte repite la faena.

Este semanario también ha accedido a la documentación que explica por qué el Ejército y la administración Boluarte han estampado el sello de "secreto" a las millonarias adquisiciones.

Horas antes de que el general César Briceño declarara secreto de Estado las compras, el Órgano de Control Institucional del Ejército, entidad adscrita a la Contraloría General, había emitido un informe donde detallaba una serie de irregularidades y responsabilidades penales de altos militares en la contratación del servicio de mantenimiento de cuatro helicópteros MI-8.

Para el servicio, conocido en el mundo militar como "overhaul", el Ejército contrató en abril del 2023 de manera directa a la empresa Helicentro Perú. El acuerdo ascendió a S/ 96.9 millones y los helicópteros que iban a pasar por el mantenimiento tenían las placas EP-643, EP-650, EP-660 y EP-662, todos de origen ruso y fabricados en 1992.

El informe de auditoría de 177 páginas, firmado por el auditor Andrés Iparraguirre Cabrera, detalla que el Ejército le dio un adelanto injustificado de S/ 29 millones a Helicentro. También que no le aplicó penalidades por S/ 8.4 millones por in-

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

Bolsillos llenos

► Breve historia de cómo fue que la otorongada se fue engordando el sueldo y cómo es que los militares metidos en el Congreso se hicieron su propia ley para estar por encima del promedio



Jorge Montoya, de Renovación Popular.



José Cueto, de Renovación Popular.

FOTO JOEL DURÁN • HT3

ANEXO 03
APOYO LOGÍSTICO PARA LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2024
CONGRESISTA: MONTAÑA MARIQUE JORGE CARLOS
(EXPRESADO EN NUEVO SOLES)

N°	MES	FECHA	TOTAL BRUTO	RETENCIÓN RENTA STA. CATEGORÍA	DEVOLUCIÓN	TOTAL NETO
1	ENERO	(01 - 12)	4,000.00	1,200.00	0.00	2,800.00
2	FEBRERO	(01 - 29)	4,000.00	1,200.00	0.00	2,800.00
3	MARZO	(01 - 31)	4,000.00	1,200.00	0.00	2,800.00
4	ABRIL	(01 - 30)	4,000.00	1,200.00	0.00	2,800.00
5	MAYO	(01 - 31)	4,000.00	1,200.00	0.00	2,800.00
6	JUNIO	(01 - 30)	4,000.00	1,200.00	0.00	2,800.00
7	JULIO	(01 - 31)	4,000.00	1,200.00	1,130.00	2,680.00
8	AGOSTO	(01 - 31)	4,000.00	1,200.00	0.00	2,800.00
9	SEPTIEMBRE	(01 - 30)	4,000.00	1,200.00	0.00	2,800.00
10	OCTUBRE	(01 - 31)	4,000.00	1,200.00	0.00	2,800.00
11	NOVIEMBRE	(01 - 30)	4,000.00	1,200.00	0.00	2,800.00
12	DICIEMBRE	(01 - 31)	4,000.00	1,200.00	560.00	2,240.00
TOTAL			48,000.00	14,400.00	1,690.00	31,910.00

APOYO LOGÍSTICO PARA LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN
ENERO - JULIO 2025
CONGRESISTA: MONTAÑA MARIQUE JORGE CARLOS
(EXPRESADO EN SOLES)

N°	MES	FECHA	TOTAL BRUTO	RETENCIÓN RENTA STA. CATEGORÍA	TOTAL NETO
1	ENERO	(01 - 31)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
2	FEBRERO	(01 - 29)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
3	MARZO	(01 - 31)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
4	ABRIL	(01 - 30)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
5	MAYO	(01 - 31)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
6	JUNIO	(01 - 30)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
7	JULIO	(01 - 31)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
TOTAL			28,000.00	8,400.00	19,600.00

La asignación para semana de representación de Montoya, semejante a la de sus colegas: 48,000 soles anuales.

MONTO NETO ABONADOS

CONGRESISTA: CUETO ASERVI, JOSE ERNESTO

MES/AÑO	REMUNERACIONES	GRATIFICACIÓN	BONO AL PERSONAL ACTIVO	TOTAL
2021				
AGOSTO	15,936.16	0.00	0.00	15,936.16
SEPTIEMBRE	12,885.75	0.00	0.00	12,885.75
OCTUBRE	15,979.68	0.00	0.00	15,979.68
NOVIEMBRE	12,380.03	0.00	0.00	12,380.03
DICIEMBRE	13,019.15	17,004.00	0.00	30,023.15
TOTALES:	68,109.77	17,004.00	0.00	85,113.77
2022				
ENERO	13,070.22	0.00	0.00	13,070.22
FEBRERO	11,891.40	0.00	0.00	11,891.40
MARZO	11,877.44	0.00	0.00	11,877.44
ABRIL	12,927.05	0.00	0.00	12,927.05
MAYO	12,849.01	0.00	0.00	12,849.01
JUNIO	12,493.83	0.00	0.00	12,493.83
JULIO	11,143.40	17,004.00	0.00	28,147.40
AGOSTO	12,331.17	0.00	0.00	12,331.17
SEPTIEMBRE	12,033.13	0.00	0.00	12,033.13
OCTUBRE	11,603.61	0.00	0.00	11,603.61
NOVIEMBRE	11,708.07	0.00	0.00	11,708.07
DICIEMBRE	8,936.03	17,004.00	0.00	25,940.03
TOTALES:	142,364.36	34,008.00	0.00	176,372.36
2023				
ENERO	12,398.29	0.00	0.00	12,398.29
FEBRERO	12,352.80	0.00	0.00	12,352.80
MARZO	12,398.29	0.00	0.00	12,398.29
ABRIL	12,398.30	0.00	0.00	12,398.30
MAYO	12,398.29	0.00	0.00	12,398.29
JUNIO	12,398.30	0.00	0.00	12,398.30
JULIO	12,109.77	17,004.00	0.00	29,113.77
AGOSTO	12,347.75	0.00	0.00	12,347.75
SEPTIEMBRE	12,347.74	0.00	0.00	12,347.74
OCTUBRE	12,326.25	0.00	0.00	12,326.25
NOVIEMBRE	12,139.74	0.00	9,900.00	22,039.74
DICIEMBRE	9,250.32	17,004.00	0.00	26,254.32
TOTALES:	144,865.84	34,008.00	9,900.00	188,773.84

Registros del sueldo de José Cueto Aservi desde que ingresó. El 2023 recibió 188,773 soles. Esa cifra es ahora mayor.

REBECA DIZ

Esta semana Dina Boluarte casi dice una verdad. “Los peruanos gastan más porque tienen más dinero en el bolsillo”, dijo en uno de sus discursos flanqueada por militares. Para ajustarse a los hechos, Boluarte debió decir: “algunos” peruanos tienen más plata en el bolsillo. Y pudo añadir: Por ejemplo, los 130 connacionales afincados en la Plaza Bolívar. Mención especial merecen los cuatro oficiales jubilados de las Fuerzas Armadas que mandaron hacer una ley a la medida de sus galones. Esta gracia legislativa les ha servido para embolsicarse mensualmente más de 40,000 soles del Estado.

En julio del 2021, cuando la recién elegida hornada de congresistas tomó juramento, el sueldo bruto por cabeza era de 15,500 soles. A modo de “adenda” recibían otro sueldo de 7,617 soles brutos. Lo llaman “asignación funcional” y oficialmente es para financiar “los gastos que conlleva el cargo”. Fue una manera de sacarle la vuelta a la ley que les impide elevarse el sueldo. Los parlamentarios reciben la plata en una cuenta personal y no tienen que dar explicaciones.

Al salario oficial y oficioso (23,217 soles brutos) hay que sumarle 34,000 soles netos de las dos gratificaciones anuales. Y como plus, otros 2,800 soles, también netos y mensuales, para “gastos de representación”. Hasta aquí van, en promedio, más de 28,000 soles. Pero hay más. Mucho más.

La curul trae consigo otras gracias: un sueldo íntegro anual a modo de CTS (15,600 soles), seguro de salud privado extendido a la familia, viajes nacionales e internacionales gratis, viáticos, tarjetas de alimentos y reembolso de gastos sustentados en comprobantes de pago. Y aun así no estaban satisfechos.

El primer zarpazo al presupuesto de la planilla

lo metieron en noviembre del 2023. Faltando un mes para cobrar la gratificación de 17,004 soles, la mesa directiva al mando de Alejandro Soto dispuso el desembolso de un bono “extraordinario” de 9,900 soles por cabeza. Argumentaron que era para sobrellevar de mejor manera las “situaciones coyunturales que se viven en el Perú”.

No fue el único bono que Soto ordenó durante su gestión. El mes de abril del 2024 los congresistas recibieron, además de los 7,617 soles de la “asignación por función congresal”, una asignación “adicional” de 10,207 soles. Este bono pasó piola porque no está registrado en la planilla convencional.

También fue en la presidencia de Soto que la asignación extraordinaria de 2,800 soles de “apoyo para la semana de representación” se convirtió en otro sueldo fijo mensual. Desde el 2024 lo cobran puntualmente todos los meses, incluido diciembre, enero o julio, cuando el Parlamento está cerrado por vacaciones. Por supuesto, no devuelven un céntimo.

Convertidos ya en experimentados cogoteros del presupuesto nacional, en mayo del 2024 dispusieron un aumento en la asignación funcional. Aplicados los descuentos de ley, cada otorongo se embolsica 9,922 soles todos los meses. Así que la suma de sueldo y adendas supera los 30,000 soles mensuales.

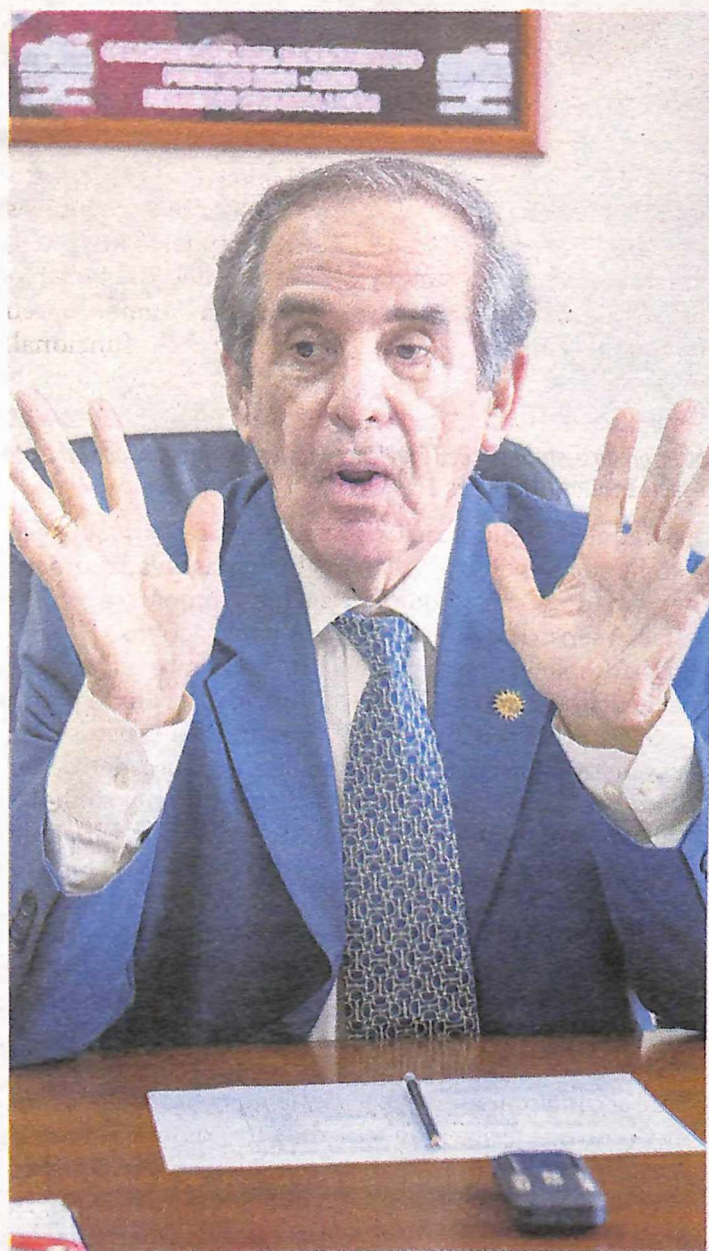
La otorongada alegó que el ajuste salarial se debía “al encarecimiento de la canasta básica”. Es que no tienen la receta del “menú de 10 soles con postrecito incluido” de Dina.

Sumando sueldos, bonos y sobresueldos, es indiscutible que el poder adquisitivo de los okupas del Palacio Legislativo ha mejorado considerablemente en los últimos cuatro años. Pero a unos les ha ido mejor que a otros.

Hay un selecto grupo de otorongos que en lugar de bolsillos tienen alforjas. Y para llenarlas confeccionaron una ley a la medida.



José Williams Zapata, de Avanza País.



Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso.

FOTO JOEL DURÁN • HT3

ANEXO 02
APOYO LOGÍSTICO PARA LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2024
CONGRESISTA: WILLIAMS ZAPATA JOSÉ DANIEL
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

N°	MES	FECHA	TOTAL BRUTO	RETENCIÓN RENTA STA. CATEGORÍA	TOTAL NETO
1	ENERO	(08 - 12)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
2	FEBRERO	(05 - 09)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
3	MARZO	(18 - 22)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
4	ABRIL	(22 - 26)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
5	MAYO	(20 - 24)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
6	JUNIO	(17 - 21)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
7	JULIO	(08 - 12)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
8	AGOSTO	(26 - 30)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
9	SEPTIEMBRE	(23 - 27)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
10	OCTUBRE	(21 - 25)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
11	NOVIEMBRE	(11 - 15)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
12	DICIEMBRE	(16 - 20)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
TOTAL			48,000.00	14,400.00	33,600.00

APOYO LOGÍSTICO PARA LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN
ENERO - JULIO 2025
CONGRESISTA: WILLIAMS ZAPATA JOSÉ DANIEL
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

N°	MES	FECHA	TOTAL BRUTO	RETENCIÓN RENTA STA. CATEGORÍA	TOTAL NETO
1	ENERO	(27 - 31)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
2	FEBRERO	(24 - 28)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
3	MARZO	(24 - 28)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
4	ABRIL	(26 - 30)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
5	MAYO	(24 - 28)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
6	JUNIO	(21 - 25)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
7	JULIO	(14 - 18)	4,000.00	1,200.00	2,800.00
TOTAL			28,000.00	8,400.00	19,600.00

La asignación para la semana de representación de Williams Zapata: 4,000 soles brutos, 2,800 netos.

FOTO CÉSAR ZAMALLOA • HT3

ANEXO 01
ASIGNACIÓN POR FUNCIÓN CONGRESAL
ENERO - DICIEMBRE 2023
CONGRESISTA: CHIABRA LEÓN ROBERTO ENRIQUE
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

N°	MES	TOTAL BRUTO	RETENCIÓN RENTA STA. CATEGORÍA	TOTAL NETO
1	ENERO	7,617.20	1,516.58	6,100.62
2	FEBRERO	7,617.20	1,516.58	6,100.62
3	MARZO	7,617.20	1,516.58	6,100.62
4	ABRIL	7,617.20	1,516.58	6,100.62
5	MAYO	7,617.20	1,516.58	6,100.62
6	JUNIO	7,617.20	1,516.58	6,100.62
7	JULIO	7,617.20	1,298.26	6,318.94
8	AGOSTO	7,617.20	1,536.23	6,080.97
9	SEPTIEMBRE	7,617.20	1,536.23	6,080.97
10	OCTUBRE	7,617.20	1,536.23	6,080.97
11	NOVIEMBRE	7,617.20	1,536.23	6,080.97
12	DICIEMBRE	7,617.20	2,350.00	5,267.20
TOTAL		91,406.40	18,892.66	72,513.74

Asignación por función congresal de Chiabra de enero a diciembre del 2024. En abril cobraron un "bono adicional" de 10,207 soles y a partir de mayo aumentó el monto de la asignación en 5,103 soles y 52 céntimos.

Se trata de los militares jubilados.

Hasta diciembre del 2021 la legislación permitía a militares y policías jubilados trabajar para cualquier institución o gobierno en asuntos de seguridad ciudadana sin perder su pensión. La condición, como para cualquier peruano -civil o militar-, era que la suma

de las dos remuneraciones no superara las "6 unidades de ingreso del sector público". Es decir, 15,600 soles mensuales. La norma contempla una excepción para los meses de gratificaciones y aguinaldos.

De cumplir con la legislación vigente, los cinco primeros meses del 2021 los recién electos congresistas José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín hubieran tenido que "ajustar" a la baja el sueldo que recibían del Congreso. No fue así. Según las planillas del Congreso, los cinco recibieron sueldos y asignaciones completas. Y lo mismo sucedió con sus pensiones de jubilación.

El suboficial de la Policía (r) Alfredo Azurín es el primo pobre en esta historia. Su pensión de jubilación es de 2,989.03 soles.

El 2021 Montoya tenía una jubilación de 8,537 soles. Además de 600 soles anuales en aguinaldos y 400 soles del bono de "escolaridad". Su colega, el almirante (r) Cueto, recibía exactamente lo mismo.

En el caso de Chiabra y Zapata, a los 8,537 soles sumaban la bonificación mensual de 2,550 de "defensores de la Patria". En total 11,087 soles fijos al mes, más S/ 1,000 soles anuales en aguinaldos y escolaridad.

Desde este año la pensión de los oficiales es de 9,601 soles. En el caso de Williams, recibe además otra bonificación de 2,550 soles por el operativo Chavín de Huántar. Así que sumando pensión, bonos, sueldo y asignaciones, la remuneración de José Williams supera los 40,000 soles.

Sin remendar la ley hubiera sido imposible.

DONDE MANDA GENERAL

En septiembre del 2021 María del Carmen Alva propuso modificar la ley para que los pensionistas uniformados pudieran brindar cualquier servicio al Estado sin perder la pensión de jubilación. La propuesta fue a parar a la

Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas. El grupo de trabajo estaba al mando del congresista Williams Zapata y la integraban sus colegas Montoya, Cueto, Chiabra y Azurín.

Dos meses después, el 6 de diciembre, la trinchera de los militares puso a debate el proyecto, pero dio el cambiao. En lugar del texto de Alva presentó otro recosido a la medida de los cinco militares que integraban la comisión.

En el artículo 2 añadieron explícitamente que los pensionistas uniformados podrán recibir la doble remuneración del Estado "exceptuándolos del monto máximo establecido (...)". Y en el artículo 3, para que no quedaran dudas de que la ley los tenía que beneficiar, incluyeron que "la autorización contenida en la presente ley es de aplicación a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía que ejercen cargos públicos por elección popular".

El proyecto salió de la Comisión de Orden Interno aprobado por unanimidad, incluyendo el voto de los propios beneficiarios que en *petite comité* sintieron que no había motivo para guardar las formas y abstenerse de meter la mano en un proyecto que mejoraría sustancialmente sus cuentas corrientes.

Cuando el proyecto llegó al pleno del Congreso, los militares dieron un paso atrás. Se abstuvieron de votar. Tampoco les hacía falta. En el hemiciclo de los niños, las tenderas y las rapaces de variado plumaje público, cuando se habla de plata todos entienden.

La Fiscalía de la Nación los ha denunciado por tráfico de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Siguiendo con el protocolo, la Comisión de Ética, reconvertida en la lavandería oficial del Congreso, archivó el expediente. Y así Dina puede seguir presumiendo de ciudadanos a los que su gobierno ha llenado los bolsillos de plata. ■

Tortaza

► El gobierno destina 203 millones para la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. Esa suma triplica la del año pasado

BRUNO AMORETTI

Boluarte y sus socios han lanzado una bombona de oxígeno a los medios de comunicación. Este año la inquilina de Palacio ha destinado 203 millones de soles para publicidad estatal, un presupuesto que triplica al del año anterior. La campaña del censo nacional terminó siendo una coartada para engrasar la maquinaria mediática.

Las adjudicaciones, como en los viejos tiempos, son a dedo. Entre 2024 y lo que va de este año, el medio que más publicidad estatal del gobierno central ha percibido es Latina, que recibió S/ 7'559,131. Le siguen ATV, con S/ 6'548,197; RPP, con S/ 6'325,959; América, con S/ 4'968,863, y la Corporación Radial del Perú, que obtuvo S/ 4'842,682.

En medio de la sequía publicitaria que golpea a los medios tradicionales, el gran salvavidas ha sido la campaña del censo, ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El monto destinado asciende a S/ 26 millones, batiendo todos los récords. El censo anterior, realizado en 2017, destinó a la campaña en medios un presupuesto de S/ 7,3 millones. Menos de la tercera parte del festín organizado por Boluarte.

La operación comenzó en marzo, cuando el INEI asignó S/ 16 millones para la campaña del censo. Un mes después, sin explicación alguna, el monto subió en otros 10 millones. El banquete publicitario engordaba al mismo ritmo que la desaprobación de Boluarte.

El INEI abrió un concurso

“Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros”
“Año de la recuperación y construcción de la economía peruana”

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

ACTA N° 001-PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO -CD N° 620-2024-INEI

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN TELEVISIÓN NACIONAL PARA LOS CENSOS NACIONALES XII DE POBLACIÓN, VII DE VIVIENDA Y IV DE COMUNIDADES INDÍGENAS

En, Jarama, a los veinticinco (25) días del mes de julio del año 2024 a las 13:00 horas, en el local del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se dio inicio a la apertura de oferta, a fin de evaluar y realizar la adjudicación del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35-2025-INEI sobre la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN TELEVISIÓN NACIONAL PARA LOS CENSOS NACIONALES XII DE POBLACIÓN, VII DE VIVIENDA Y IV DE COMUNIDADES INDÍGENAS”, en mérito de la aprobación contenida en la Resolución de Secretaría General N° 46-2025-INEI, de fecha 15 de julio del 2025, siendo el Dependiente Encargado de las Contrataciones designado para realizar las acciones conducentes de la contratación.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En virtud de lo antes indicado, se procedió a verificar la oferta del proveedor que fue presentada a través de la plataforma del SEACE y revisado el cumplimiento de la documentación de presentación obligatoria, se procedió a otorgar la BUENA PRO de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	POSTOR	RUC	OFERTA
1	COMUNICACIONES PERUANA S.A.	22165163861	S/ 2.694.786,86

Señalo las 14:30 horas, se da por concluido el Acto, previa mediación del acta, la que es suscrita por el Dependiente Encargado de las Contrataciones.

Alcides Morán Flores
Dependiente Encargado de las Contrataciones

Instituto Nacional de Estadística e Informática
Av. José Carlos Mariátegui 608, Lima 15001, Perú
01 743 9791 | e-mail: gpo@inei.gob.pe
www.inei.gob.pe

Acta de otorgamiento de buena pro a Latina del 25 de julio por S/ 2'694,786 para la campaña del censo. El canal del fondo de inversión Enfoca ha sido el medio de comunicación más beneficiado por este gobierno entre el 2024 y este año: S/ 7'559,131 provenientes de las arcas fiscales.

“Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros”
“Año de la recuperación y construcción de la economía peruana”

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35-2025-INEI-PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PUNTO DE VENTA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PARA LOS CENSOS NACIONALES XII DE POBLACIÓN, VII DE VIVIENDA Y IV DE COMUNIDADES INDÍGENAS

En, Jarama, a los trece (13) días del mes de agosto del año 2025 a las 10:46 horas, en el local del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se dio inicio a la apertura de oferta, a fin de evaluar y realizar la adjudicación de la PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35-2025-INEI sobre la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PUNTO DE VENTA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PARA LOS CENSOS NACIONALES XII DE POBLACIÓN, VII DE VIVIENDA Y IV DE COMUNIDADES INDÍGENAS”, en mérito de la aprobación contenida en la Resolución de Secretaría General N° 97-2025-INEI de fecha 01 de agosto del 2025, siendo el Dependiente Encargado de las Contrataciones designado para realizar las acciones conducentes de la contratación.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En virtud de lo antes indicado, se procedió a verificar la oferta del proveedor que fue presentado a través de la plataforma del SEACE y revisado el cumplimiento de la documentación de presentación obligatoria, se procedió a otorgar la BUENA PRO de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	POSTOR	RUC	OFERTA
1	EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.	20143226016	S/ 560.872,22 (Quincecientos sesenta mil ochocientos setenta y dos con 22/100)

Señalo las 12:00 horas, se da por concluido el Acto, previa mediación del acta, la que es suscrita por el Dependiente Encargado de las Contrataciones.

Afirmación:

Alcides Morán Flores
Dependiente Encargado de las Contrataciones

Instituto Nacional de Estadística e Informática
Av. José Carlos Mariátegui 608, Lima 15001, Perú
01 743 9791 | e-mail: gpo@inei.gob.pe
www.inei.gob.pe

Acta de otorgamiento de buena pro a Empresa Editora El Comercio del 13 de agosto por S/ 560,872 para la campaña del censo. Es uno de los dos contratos que celebraron los Miró Quesada con el INEI, cuyo monto total asciende a S/ 899,377.

para contratar a una central de medios que se encargara de la campaña publicitaria del censo. Esto fue en abril pasado. El proceso estuvo manchado por denuncias y



Gaspar Morán Flores, jefe del INEI. Aprobó un presupuesto inicial de 16 millones de soles para la publicidad del censo. Luego, sin ninguna explicación, el monto subió en otros 10 millones.

disputas entre firmas que aspiraban a llevarse el botín.

Uno de los principales competidores era Fama y Asociados, propiedad de Martín Valdivia Rodríguez, exdirector de algún diario chicha durante el fujimorato.

Valdivia llegaba al concurso del INEI con altas expectativas, pues poco antes había asegurado un contrato con la PCM por tres millones de soles para manejar otras campañas publicitarias del gobierno.

El proceso de abril, sin embargo, se canceló de manera sorpresiva. La institución arguyó que lo que había hecho era un “estudio de mercado preliminar”. Valdivia respondió con cartas

exigiendo la adjudicación. Estaba convencido de haber ganado y sentía que le estaban serruchando el piso. Luego desplegó una campaña mediática contra el INEI. Gaspar Morán, jefe de esta institución, le respondió de tú a tú a través de Willax, donde ventilaron dos reportajes en los que atacaban directamente a Valdivia.

El 28 de mayo el INEI declaró ganadora de una segunda licitación a Mar Publicidad. La empresa pertenece al conglomerado Speedy Group que dirige Manuel Altamirano Ramírez. Este empresario está vinculado a varios escándalos de corrupción. Tiene expedientes

fiscales en casos de supuesta colusión agravada, organización criminal y presunto lavado de activos.

El contrato entre Mar Publicidad y el INEI para la campaña del censo se formalizó en una orden de servicio con un valor simbólico de S/ 0,01. El INEI nunca transparentó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) la licitación que otorgó la victoria a la empresa de Altamirano.

“El verdadero negocio de las centrales de medios está en cobrarles a los medios de comunicación una ‘comisión’ por colocar los anuncios del Estado en sus parrillas de programación. La nueva ley que regula la



Latina: de lejos, la empresa favorita, en términos del presupuesto anual, de este gobierno.



Un báner de la campaña del censo en el prime time de ATV el 26 de agosto. El canal del elusivo Ángel González recibió del INEI la tajada más grande: S/ 3'923,464 cargados al erario.

publicidad estatal ya prohíbe esta práctica, pero es letra muerta", afirma Edgar Guevara, director de la organización Medios Perú.

Actualmente la comisión que cobra Mar Publicidad por la publicidad del censo que coloca en los medios oscila entre el 17% y el 25%.

Firmado el contrato, Mar Publicidad le entregó a la PCM y al INEI una primera versión de su Plan de Medios. Incluía medios de alcance nacional, local, redes sociales, paneles publicitarios e influencers por una suma total de S/ 26,4 millones. El documento fue revelado por el director de este semanario en su podcast del 30 de junio pasado.



Manuela Camacho, periodista e influencer que figura en el Plan de Medios de Mar Publicidad: "Mi nombre aparece ahí, pero nunca me incluyeron en una cotización. Nunca me contactó una agencia".



Manuel Altamirano Ramírez, fundador de la central de medios Mar Publicidad, ganadora de la licitación para ejecutar la campaña publicitaria del INEI.

Esta publicación se comunicó con un grupo de influencers, cuyos nombres aparecen en el Plan de Medios elaborado por Mar Publicidad. Algunos negaron haber sido invitados al festín y otros dijeron que recibieron una llamada pero de otras empresas.

"A mí me contactó la plataforma Publyfier, coticé con ellos. Me informaron de la campaña, los montos que ofrecían eran muchísimo menos que los que colocó Mar Publicidad en su Plan. Obviamente inflaron hasta 50 o 60 veces el costo original. Luego desaparecieron y no supe más", dice uno de los influencers que prefiere el anonimato.

Consultada al respecto, la plataforma Publyfier negó a esta publicación que haya tenido un vínculo comercial con Mar Publicidad durante la campaña del censo.

"Mi nombre aparece ahí, pero nunca me incluyeron en una cotización. Nunca me contactó una agencia. Una persona me habló sobre esa campaña, pero no hubo una invitación", dice la periodista e influencer Manuela Camacho.

De acuerdo con fuentes cercanas a la campaña del censo, Mar Publicidad y el INEI decidieron dejar fuera a los influencers. La mayor parte de la torta terminó en los grandes medios, en sus versiones tradicionales y digitales.

Según el registro de proveedores del Seace, el canal de señal abierta más beneficiado fue ATV, con S/ 3'923,464. Le siguen Latina (S/ 3'196,994), Panamericana (S/ 1'645,470), América (S/ 1'131,594) y Willax (S/ 574,896). El Grupo RPP recibió S/ 1'096,538.

La otra gran torta publicitaria es a cuenta del turismo. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) es la institución que más espacios publicitarios compró entre el 2024 y el 2025. Según el Seace, el organismo desembolsó S/ 169,2 millones en medios tradicionales, electrónicos y paneles publicitarios.

Seis fueron las campañas más importantes que se planificaron desde la Oficina de Comunicaciones de PromPerú. Entre ellas figuran "Día de la Canción Criolla", "Reactivación Norte", "Viaje de Fin de Año" y "Semana Santa". La mayor tajada se la llevaron los canales América, Latina y ATV, que se repartieron S/ 6'009,498.

En el sector radial, la emisora del clan Delgado Parker es de lejos la favorita de la entidad promotora del turismo. Según cifras oficiales, PromPerú le adjudicó a dedo S/ 1,2 millones al Grupo RPP.

Ahora se avecina una nueva tanda de puyazos de los grandes medios para obtener los S/ 35'118,393 que destinará la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a las próximas elecciones generales del 2026.

Pronóstico reservado

► Diez gremios de EsSalud empiezan una huelga indefinida este 9 de septiembre. Están hartos de ser el feudo del partido de Acuña y de la corrupción generalizada de la administración

ALONSO ZAMBRANO

Desde el 9 de septiembre miles de pacientes se quedarán sin atención médica. El personal médico de EsSalud acatará una huelga indefinida a nivel nacional. Denuncian corrupción en la compra de equipos médicos, locales alquilados a precios exorbitantes y una gestión copada por Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña. Exigen la renuncia inmediata del presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego.

“El actual presidente del Seguro Social desconoce el funcionamiento de la institución pese a llevar meses en el cargo (...). Hasta ahora no tenemos respuesta a nuestras demandas. Nos ha aplicado la política del avestruz: silencio ante el colapso que se vive en los hospitales”, señala Santiago Vincés, secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social (Sinamssop), uno de los diez gremios que organizan la protesta.

Vincés asegura que en septiembre del año pasado firmaron convenios para implementar mejoras laborales. En aquel momento al mando de la institución estaba María Elena Aguilar. Cuando Segundo Acho tomó la institución, enterró los compromisos.

“Acordamos reconocimientos para los médicos especialistas, bonificaciones para colegas que trabajaban en zonas rurales y otros 30 puntos que EsSalud hasta ahora no ha cumplido”, dice Vincés. El dirigente del Sinamssop denuncia que la institución ha sido copada por allegados al partido de César Acuña. “Va-

rios de los cargos gerenciales están siendo ocupados por personas vinculadas a Alianza para el Progreso”, afirma. Lo grave es que no tienen experiencia alguna en salud.

Entre los militantes de APP que ahora fungen como altos funcionarios en el Seguro Social están William Alcántara Infantes, actual gerente central de Planeamiento y Presupuesto, quien fue jefe de la Oficina de Grados y Títulos de la UCV y asesor de Richard Acuña en el Congreso de 2016. También Henry Morales Marín, subgerente de Adquisición y Ejecución Contractual de EsSalud y militante de APP desde 2014. Otros casos son los de Ricardo Bernaola Zevallos, designado el pasado 24 de julio director general de la Red EsSalud-Jaén; Claudia Holguín, gerente de la Red EsSalud-La Libertad; Omar Merino, director de la Red EsSalud-Apurímac. Y la lista continúa.

“Estamos cansados de estos funcionarios que entran por favoritismo político”, reclama Juana Rojas, representante del Sindicato de Obstetras de EsSalud, otro de los gremios que se suma a la huelga.

“En hospitales como el Ramiro Priale de Junín las emergencias se atienden en pasadizos, sin equipos ni material adecuado. No hay ni estetoscopios ni termómetros (...). En el hospital Lazarte, en La Libertad, han instalado una sala de partos en un patio, con ambientes hacinados que vulneran la privacidad y dignidad de las madres”, denuncia Rojas.

“Estamos viviendo una crisis terrible por una mala gestión que ha politizado al Seguro Social (...). Un solo técnico o profesional atiende a 24 o 30



“Exigimos la salida del actual presidente de EsSalud”, dice Vilma Alvarado, secretaria del Sindicato de Enfermeras de EsSalud.



“Estamos viviendo una crisis terrible por una mala gestión que ha politizado el Seguro Social”, dice Juana Gálvez, representante del Sindicato de Técnicos Sociales y Asistenciales de EsSalud.



“El actual presidente de EsSalud desconoce el funcionamiento de la institución. Hasta ahora no tenemos respuesta a nuestras demandas. Nos ha aplicado la política del avestruz”, dice Santiago Vincés, secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social.



“Estamos cansados de los funcionarios que entran por favoritismo político”, reclama Juana Rojas, representante del Sindicato de Obstetras de EsSalud.

pacientes, lo cual es imposible. Hospitales como el Juan José Rodríguez, de Chorrillos, o el Alcántara, de La Molina, han colapsado porque se han triplicado los pacientes”, afirma Juana Gálvez, representante del Sindicato de Técnicos Sociales y Asistenciales de EsSalud, otro de los gremios que se sumará a la protesta del 9 de septiembre.

Vilma Alvarado, secretaria del Sindicato de Enfermeras de EsSalud —que agrupa a 10,800 trabajadores—, señala que además de la salida de Segundo Acho exigen la anulación del Decreto Legislativo 1666, promovido por el gobierno de Dina Boluarte, norma que pone los fondos de EsSalud bajo control del MEF. “EsSalud no forma parte

del presupuesto del gobierno. Tenemos nuestro propio presupuesto y autonomía. Incluir al Seguro Social en ese decreto es inconstitucional (...) El Congreso aprobó un dictamen para excluir a EsSalud del decreto 1666, pero el gobierno de Dina Boluarte lo observó. O sus técnicos no conocen las leyes, o hay un interés oculto del Ejecutivo de capturar el

FOTO JOEL DURÁN • HT3

FOTO JOEL DURÁN • HT3



Segundo Acho Mego, el inepto presidente ejecutivo de EsSalud.

Seguro Social", sostiene Alvarado.

CORRUPCIÓN EN ESSALUD

"EsSalud tiene el índice de corrupción más alto de todas las instituciones públicas: 83% de inconducta funcional y 91% de corrupción, según cifras de la Contraloría", advierte Santiago Vincés, secretario general del Sinamssop. El médico asegura que una de las exigencias de la huelga del 9 de septiembre es tomar medidas urgentes contra la corrupción que ha corroído la institución.

"La actual gestión de EsSalud quiere poner en funcionamiento la Torre Trecca, el edificio abandonado hace 50 años, lo que costará 625 millones de soles y beneficiaría a AUNA con un convenio. Mientras tanto, tenemos hospitales como Rebagliati, Almenara o Sabogal con consultorios vacíos", critica Vincés. "Se están promoviendo asociaciones público-privadas en Piura, Chimbote, Callao y Villa María del Triunfo por más de 4,000 millones de soles. Hay un operativo encubierto de privatización del Seguro Social", agrega.

"En el Hospital Negreiros tenemos un equipo llamado Ciclotrón, que produce insumos radioactivos para diagnóstico de cáncer. Está inoperativo hace dos años. Ponerlo en marcha cuesta 7 millones de soles,



Ricardo Bernaola Zevallos, militante de APP. Fue designado el pasado 24 de julio como director de la Red EsSalud - Jaén.



Henry Morales Marín, actual subgerente de Adquisición y Ejecución contractual de EsSalud. Es militante de APP.



Omar Merino fue nombrado el 30 de abril de este año director de la Red Apurímac de EsSalud. También es militante de APP.



William Alcántara Infantes, exjefe de la Oficina de Grados y Títulos de la UCV y exasesor de Richard Acuña. Fue designado el 22 de agosto como gerente central de Planeamiento y Presupuesto de EsSalud.

pero las autoridades de EsSalud prefieren pagar a empresas privadas por el servicio", añade.

Según el portal del OSCE, entre 2024 y 2025 la empresa Ciclotrón Perú S.A., de Oncosalud, ha ganado contratos con EsSalud por 4.3 millones de soles para suministrar el radiofármaco Fludeoxiglucosa, el mismo insumo que produce la máquina inoperativa del Hospital Negreiros.

"No es falta de dinero sino mala gestión e incapacidad de ejecutar inversiones", reclama Santiago Vincés. El médico asegura que las autoridades del Seguro Social despilfarran el dinero alquilando locales en lugar de crear nuevos hospitales. "De los 400 establecimientos que tiene el Seguro Social, más de 130 son alquilados. Es decir, las autoridades prefieren pagar entre 20,000 y 30,000 soles mensuales durante años en alquileres en lugar de invertir en hospitales propios", dice.

El 11 de julio el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), una de las entidades encargadas de supervisar la sostenibilidad de EsSalud, emitió un informe que concluye que entre 2010 y 2025 los pensionistas de EsSalud aumentaron en un 90%. No obstante, los "aportantes" se redujeron en un 6%.

"La población peruana está envejeciendo. Se incrementan los pensionistas, cuyo aporte es menor, y se reduce el grupo de posibles aportantes futuros. Esta situación amerita que EsSalud desarrolle nuevos modelos para ser sostenible en el tiempo", señala el reporte.

El mismo informe detalla que si bien EsSalud contó con un balance financiero positivo en el 2024, el Congreso ha aprobado leyes que han golpeado seriamente las finanzas del Seguro Social. Una de ellas fue la Ley 31539 que permitió que los trabajadores contratados temporalmente durante la pandemia obtengan una plaza fija.

"El personal contratado durante la pandemia tenía naturaleza temporal y sólo por el período en que EsSalud los necesitara. Eso fue desvirtuado por normas legales promulgadas por el Congreso, lo que obligó a EsSalud a financiarlos con sus propios recursos", advierte el informe del FONAFE. ■

Las cojudeces de Rospigliosi



RONALD GAMARRA

Hace solo unos días, los agentes que atroz y ridículamente representaban al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentaban una y otra vez que en nuestro país los jueces tienen plena libertad para ignorar la ley de amnistía, aprobada recientemente para favorecer a violadores de derechos humanos, en virtud de los controles constitucional y convencional que estos tienen para no aplicar una ley al caso específico que conocen si la consideran anticonstitucional o contraria a los tratados internacionales firmados por nuestro país para el respeto de los derechos humanos. Por cierto, el argumento era tan flojo y contradictorio que hasta el más ingenuo tenía que preguntarse el porqué aprobaban entonces leyes que saben que son anticonstitucionales y anticonvencionales y que por ello mismo no serán aplicadas por los magistrados que respetan el derecho.

Pero la trama no solo era endeble y contradictoria, sino sobre todo cínica y mentirosa. Porque todos sabemos bien en qué clima político de intimidación y chantaje se tienen que desenvolver los jueces que quieren cumplir debidamente con su función en el país regido por el pacto parlamentario mafioso y su títere Boluarte. Una realidad en la que se quiere imponer la impunidad de un cártel político delincuencia, experto en coimas, lavado de activos, tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho, malversación y otros latrocinios, entre los cuales no pueden faltar las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad. Una realidad en que los jueces y fiscales viven bajo la permanente amenaza de ser intervenidos y reorganizados arbitrariamente por la mafia parlamentaria y el gobierno.

Es lo que acaba de ocurrir con el correcto juez Richard Concepción Carhuacho, a quien el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi ha denunciado ante la Junta Nacional de Justicia para que sea destituido cuanto antes. Lo acusa de magistrado prevaricador por negarse a aplicar las leyes anticonstitucionales y contrarias a los tratados internacionales sobre derechos humanos que el Perú se ha

comprometido a cumplir. Rospigliosi quiere poner de rodillas a los jueces con este acto de prepotencia, para el cual pretende valerse de una entidad como la JNJ, desacreditada por su obsecuencia hacia la claqué congresal y que no cesa de desenmascarse con la rehabilitación de oficio de fiscales y jueces mercedamente destituidos en su momento, como lo ha hecho con Patricia Benavides, a quien pretendió imponer como fiscal de la nación para

tomar el control del Ministerio Público.

El juez Concepción Carhuacho actúa de manera irreprochable en el marco del Estado de derecho, ejerciendo sus atribuciones y obligaciones, entre las cuales se encuentra controlar que la justicia sea servida siempre en estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales y la normatividad internacional reconocida por nuestro país. Recordemos siempre que las disposiciones que surgen de esos tratados



Juez Richard Concepción Carhuacho: demostración de coraje y dignidad.

y de los organismos cuya jurisdicción internacional hemos admitido en decisión soberana, forman parte del derecho nacional, tal como lo establece la Constitución. Y si el magistrado, al administrar justicia en un caso concreto, encuentra una disposición contraria a la Constitución, está en la obligación legal y moral de imponer el control constitucional difuso y declarar los fundamentos correspondientes para dejar de lado la ley anticonstitucional, tal como lo hace escrupulosamente el juez Concepción Carhuacho.

El problema no es el juez, sino el Congreso que aprueba con desfachatez leyes írritas, brutalmente contrarias a la Constitución. En verdad, el juez es parte de una solución, de una enmienda, al estropicio legal propiciado por una mayoría ocasional, parcializada y corrupta del Congreso, que ha decidido hacer tabla rasa del Estado de derecho en nuestro país para imponer sus intereses espurios de casta, de clan o de banda. Efectivamente, el Congreso ha aprobado leyes manifiestamente inválidas y pretende que los jueces las

apliquen ciegamente, servilmente, sin valoración jurídica y menos aún criterio de conciencia. Y si resulta que los jueces se niegan a hacerlo, pues a promover su destitución, a demandar la intervención del gobierno y el Congreso en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Ya ha anunciado el ministrol Santiváñez que su prioridad a corto plazo será la reforma judicial, es decir, apoderarse de estas entidades y ponerlas al servicio del pacto mafioso, tal como han hecho ya con la JNJ, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Y tiene cara de anunciarlo precisamente Santiváñez, ministro que carga con 12 procesos penales sobre sus bien rellenas espaldas. Por supuesto que esos 12 procesos en marcha son su gran incentivo personal para meter mano a fondo en casos que llevan adelante los organismos de la administración de justicia, como lo son las numerosas investigaciones penales de Dina Boluarte,

Keiko Fujimori, Patricia Benavides y todos los integrantes de la mafia de los cuellos blancos del juez hermanito César Hinostroza, sus sostenedores y apoyos incondicionales.

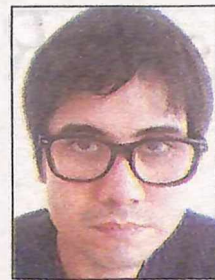
Rospigliosi nunca pasó de ser un sociólogo menos que mediocre y ahora que pretende improvisarse como jurista no hace más que decir y hacer cojudeces. Por eso resbala con su denuncia por prevaricato contra el juez Concepción Carhuacho. Este es un delito que debe denunciarse ante el Ministerio Público y procesarse y sentenciarse en el Poder Judicial. La JNJ no tiene nada que ver en esa calificación penal. En tanto el juez observe la conducta funcional que corresponde,

que en su caso es irreprochable, los amigos de Rospigliosi en la JNJ no tienen por qué meter las narices.

Peor burrada es que, a renglón seguido, Rospigliosi sostenga tan suelto de huesos que en el Perú no se han cometido crímenes de lesa humanidad. Vamos, Rospi, que ni siquiera tú te lo crees, que hace apenas unos cuantos años reconocías el contexto y sostenías exactamente lo contrario. ¿Así que no son de lesa humanidad tantos crímenes como el de Accomarca, donde 67 campesinos, entre ellos 26 niños, fueron reventados deliberadamente con granadas y balas, después de ser encerrados en un galpón? ¿No son de lesa humanidad los crímenes del destacamento militar Colina, perpetrador de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, destacamento clandestino creado directamente desde la cúspide del poder y que operaba desde el mismo Pentagonito, todo ello en la época de tu actual tótem político Alberto Fujimori y sus cómplices Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermoza Ríos? Allá tú con tu conciencia, si algo te queda. ■

EL CONGRESO HA APROBADO LEYES MANIFIESTAMENTE INVÁLIDAS Y PRETENDE QUE LOS JUECES LAS APLIQUEN CIEGAMENTE

El miedo conocido



JUAN MANUEL ROBLES

Hay algo de lo que no se habla en la discusión sobre la censura al libro de Víctor Polay Campos en la Feria del Libro de Lima y los hechos posteriores. Me refiero al miedo. El libro es un testimonio de parte de un líder subversivo encarcelado, que en varios pasajes hace una autocrítica y pide perdón a las víctimas. Pero no importa. Para la división antiterrorista, el objeto es el cuerpo del delito, la evidencia física de un ilícito grave. De ahí en adelante, lo que queda es determinar si la responsabilidad recae en pocos o en muchos. Empieza así una dinámica que ya conocemos en el Perú (aunque muchos parecen haberse olvidado). La de crear una atmósfera de temor para que otros cooperen.

Porque uno nunca sabe cuándo está siendo cómplice del terrorismo, o eso nos hacen creer. Cuidado. No son solamente los editores que publicaron el libro de un subversivo. Haber aprobado el lanzamiento, por ejemplo, te incrimina también. ¿Cuánto? Eso depende. ¿Conocías el contenido? ¿Hiciste algo para evitar su exhibición? No es necesario ser consciente de lo hecho para que puedas terminar salpicado. Las leyes antiterroristas de los noventa siguen vigentes, son serias y tienen brazos largos.

Ya se abrió una carpeta. Ya se inició la investigación. Los editores implicados van a tener que ir a la Dircote a declarar. Puede que las pesquisas se extiendan a otros. A los organizadores de la feria, por ejemplo. Pueden pasar muchas cosas.

Salvo que colabores. Si colaboras, todo puede ser más fácil. Lo harás, ¿no es cierto?

La editorial Achawata, que publicó el libro *Revolución en los andes*, del líder del MRTA, ha acusado a la Cámara Peruana del Libro de estar involucrada en la denuncia que un "ciudadano anónimo" hizo contra ellos. Dicen que tuvieron acceso al atestado. La Cámara Peruana ha negado los cargos. La editorial ha insistido y asegura que tiene pruebas.

Aducen también que la Cámara los presionó para cancelar la presentación del libro de Polay, en vez de defenderlos en su calidad de agremiados.

No se sabe a ciencia cierta qué pasó. Lo que me parece claro es que en algún momento de esta historia

ha intervenido un factor poderoso: el miedo —pánico— a verse involucrado. El ánimo de salvarse el pellejo no importa si en el camino se permite —por acción u omisión— que un inocente sea tratado como un criminal. Ese zafar cuerpo, esa disposición a

allanarse a las autoridades, a alimentar una acusación así sea a todas luces absurda —y pueda arruinar a un semejante—, nos remite a los capítulos más oscuros del conflicto armado. Lo alucinante es que estamos en 2025, el MRTA ya no existe ni amenaza, y la Dircote lleva veinte años sin evitar un atentado de esa organización (o alguna afín). Y, sin embargo, esos policías tienen todavía la capacidad —se confirma— de generar aquel efecto que aterra y paraliza, como a ratas condicionadas.

Nadie quiere mojarse ni arriesgar nada aunque estemos frente a un abuso evidente, porque las autoridades nos recuerdan las consecuencias posibles, lo que puede pasar si no dejas claro que no estás

con "ellos". ¿Y qué puede pasar?

Si no lo sabes, te cuento lo que les pasó a los jóvenes directores de Achawata, los esposos César Coca y Magdalena Suárez. Poco después de la presentación frustrada, unos veinte policías entraron corriendo a la feria y fueron a su stand. Dijeron tener una "nota criminal" debido a la denuncia anónima de un "ciudadano colaborador" que les avisó de la venta de un "libro del MRTA". Primero quisieron llevarse un ejemplar sin pagarlo. Luego empezaron a tomar fotos. Como había un alboroto, una funcionaria de la organización de la feria habilitó el camerino para los oficiales. Los policías se llevaron a Coca. Pasó más de una hora y no regresaba.

Magdalena Suárez tuvo miedo de que lo hubieran arrestado. En realidad, lo estaban interrogando. Después, ya con el abogado, se enterarían de que

aquel interrogatorio era ilegal.

La policía pidió también los DNI de todos los trabajadores del stand (la mayoría de los cuales solo trabajaban allí como vendedores). Fue un despliegue de prepotencia.

Luego de eso, citaron a Coca y a Suárez a declarar a la Dircote. El interrogatorio duró, en el caso de Magdalena, casi dos horas, y en el caso de César más de cuatro horas. Además de los policías, estaba el fiscal y el procurador.

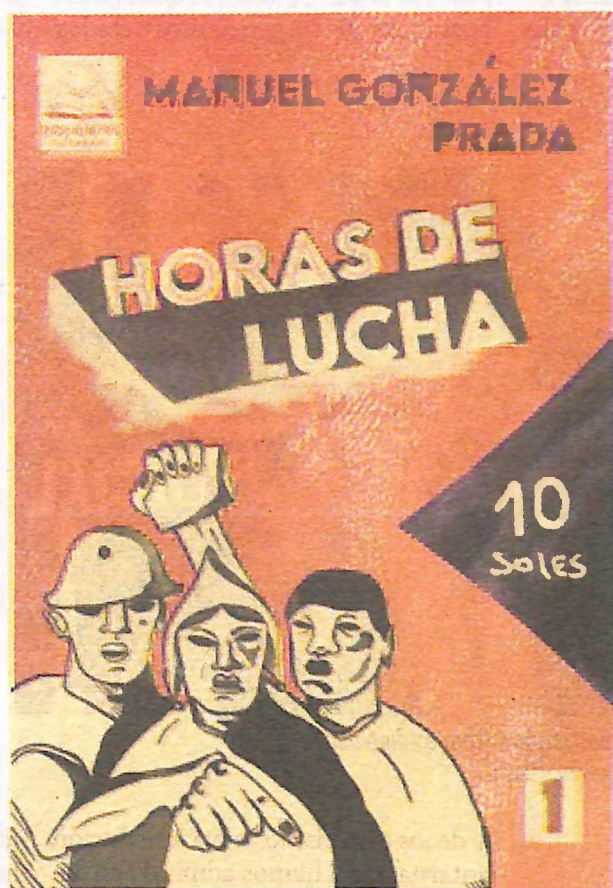
El documento que ha elevado la Dircote señala que el libro de Polay justifica, enaltece y exalta al grupo terrorista. Es un informe hecho para sustentar el inicio de un proceso penal. Como el caso se ha vuelto mediático y la ausencia de apología al terrorismo ha sido bastante argumentada, es probable que esto no pase a mayores. Pero la intención de estos señores —que, en ausencia de terroristas, justifican su partida presupuestal persiguiendo idolatrías— es clara. Y, como se ha visto, tienen el poder de hacer que ciertas cosas sucedan.

Es eso lo que infunde miedo. Todos los silencios sobre el hostigamiento a Achawata, todos los que callan en siete idiomas, todos los que, siendo escritores o editores o comunicadores no se pronuncian, tienen un temor que llega desde otras épocas, de ese Perú donde se volvió normal echar por terruco al vecino, aunque no estuvieras seguro, para no complicarte, para que no te acusaran a ti, de cómplice.

Por supuesto que no se puede menospreciar este miedo. Es difícil condenar a alguien que defiende sus intereses y su familia. Pero sí creo que, tantos años después de un conflicto armado que ya no está, es tiempo de que la indignación sea más grande que ese temor. Es tiempo de rectificar el gran error que fue consentir que las autoridades extiendan a su antojo la categorización de "terrorista" y todo por miedo a que se nos considere afines a la subversión.

Y una de las primeras formas de hacerlo es defender en masa a la editorial Achawata y a sus directores, Magdalena y César, que hoy están en problemas y necesitan nuestra firmeza: unos emprendedores de la cultura con tesón y solidaridad, que en sus cortos cuatro años no solo han publicado decenas de obras que tratan de explicar este país surreal, sino que además se han dado el trabajo de hacer una Colección Popular de títulos a diez soles.

Además, como sabemos, esto no es un "exceso" de las autoridades en su noble afán de defendernos del virus del terrorismo. Esta es la ejecución de una forma de control social que se sofisticó cada año, y que se ha vuelto una policía de la consciencia. Mientras el marco legal permita estos absurdos que dañan, la presión de los que tenemos una tribuna debe ser fuerte, total y vigorosa, para contrarrestar.



"Horas de lucha", de González Prada, a 10 soles: hazaña editorial de Achawata.

ESOS POLICÍAS TIENEN TODAVÍA LA CAPACIDAD —SE CONFIRMA— DE GENERAR AQUEL EFECTO QUE ATERRA Y PARALIZA, COMO A RATAS CONDICIONADAS



PEDRO FRANCKE

Se está llevando a cabo el censo nacional 2025. Es importante un censo ahora porque desde el anterior, que fue el 2017, nuestra demografía ha cambiado por la fuerte inmigración venezolana y la pandemia del Covid-19.

Los censos son algo fundamental para cualquier Estado. Son indispensables para hacer el planeamiento de las inversiones públicas y los programas sociales. Hoy en el Perú hemos regresado fuertemente en la calidad de la gestión pública. Dina ha canjeado ministerios con APP y Fuerza Popular por sus votos en el Congreso, aceptando ministros incapaces que han repartido los cargos a sus partidarios igualmente carentes de profesionalismo. Por otro lado, la discusión de los programas económicos y sociales tiene cada vez menos racionalidad y sustento científico; se rige por estrechos intereses particulares –como las exoneraciones a los agroexportadores– o por ideologías medievales –como cuando se niega el aborto terapéutico a niñas violadas sometiéndolas a un sufrimiento innecesario. Videos en redes carentes de sustento superan en influencia a la información verídica y el análisis de calidad profesional. Pero no podemos seguir como el cangrejo, es indispensable recuperar el conocimiento científico como una guía fundamental de la acción del Estado y la sociedad, y para eso hace falta información.

Datos claves que nos dará el censo son la población por cada centro poblado y manzana, nuestras edades, el nivel de educación al que hemos llegado, el acceso al agua, electricidad e internet, la migración, las discapacidades y el trabajo. El género también es información importante, pero en este censo no se ha querido reconocer que hay personas cuya identidad de género es diversa, con lo que una vez más se invisibiliza a la población LGBTIQ+.

Tener los datos censales es importante, además, porque conocemos mucho de nuestra realidad social y

económica a partir de encuestas que hace anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INEI). Hay una encuesta de hogares llamada ENAHO que se usa para estimar los datos de pobreza, condiciones de vida y varios otros temas; hay una encuesta de salud llamada ENDES que nos arroja indicadores en temas claves como anemia, desnutri-

ción y salud reproductiva; hay una encuesta de empleo llamada EPEN y hay algunas otras encuestas más. Empresas privadas hacen las encuestas “de opinión”, como esas en las que vemos cómo Dina Boluarte y el Congreso son repudiados por el 95 por ciento de los peruanos. Todas ellas tienen el censo nacional como base sobre la cual se

día, en Latinoamérica y muchos países del mundo se registra la etnicidad y hacerlo es una recomendación de los organismos internacionales. El censo de 2017 mostró que uno de cada cuatro peruanos (25 por ciento) se identificaba como quechua, aimara, indígena amazónico o de algún otro pueblo originario. Para toda nuestra población serían unos 7 millones y medio de peruanos indígenas, aunque solo se registró para los mayores de 12 años. De este grupo, la identidad quechua es la gran mayoría mientras que los indígenas amazónicos son el 4 por ciento. Veremos cómo sale esto en el nuevo Censo 2025.

Debo confesar que tengo ahora una estima especial a los censos. Sucede que en los últimos dos años y medio he venido haciendo investigaciones con esta base de datos, primero junto a César Huaroto y Claudia Vivas sobre la mortalidad en la niñez y más recientemente también con Rossana Mendoza sobre embarazo adolescente. Hemos trabajado los censos de 1981, 1993, 2007 y 2017, que al registrar a toda la población posibilitan mirar la realidad social con una lupa de mayor detalle que el análisis de las encuestas no permite. Antes el esfuerzo computacional para procesar millones de datos censales no estaba al alcance, pero ahora sí. Hemos encontrado que la desigualdad en la mortalidad infantil y el embarazo adolescente sigue siendo muy grande y que hay grupos socioeconómicos en los cuales estos indicadores casi no han mejorado o, incluso, han empeorado en estas



Censo: datos imprescindibles para entender al Perú.

define la muestra y se asientan las cifras publicadas. ¿Por qué? Mediante la ciencia estadística las encuestas buscan representar una totalidad nacional, pero este “universo” requiere del censo para identificarlo en detalle, así que sin censo no hay encuesta con validez estadística.

Por supuesto que el censo tiene sus limitaciones y la exclusión de la población indígena ha sido un problema recurrente. Por décadas los censos no llegaban a lugares alejados y eso fue particularmente grave en las zonas de la selva a lo largo de nuestra historia. Por eso, desde 1993 se han hecho esfuerzos especiales para registrar a las comunidades indígenas de la amazonía. Ojalá este año el censo tenga buena llegada en estas zonas. Otro avance es que, similar al del 2017, este censo pregunta cómo nos sentimos en razón de nuestras costumbres, tradiciones o antepasados. Información similar se registró hasta el censo de 1940, pero luego se la retiró hasta 2017. Hoy en

décadas.

En mi vida adulta, he pasado por los censos de 1981, 1993, 2007 y 2017. Fueron hechos en las ciudades en un solo día y con inmovilización, era obligatorio quedarnos en nuestras viviendas todo el día y las calles quedaban vacías, pero en zonas rurales duraban quince días o más. Este año es distinto. Acorde con la experiencia internacional de las últimas décadas ya no se hace encerrándonos durante un día sino a lo largo de varios meses y quienes registran la información son censistas capacitados, ya no voluntarios. Se piensa que así tendremos mejores datos con menor costo social.

El asunto de fondo es que tener buenos datos del Censo 2025 es importante porque no hay análisis serio de nuestra sociedad ni gobierno efectivo sin información estadística. Ya insistía en eso José Carlos Mariátegui casi cien años atrás en un artículo publicado en 1926. Colabora, ábrele la puerta al censista y regálale unos minutos al país. ■

**NO HAY ANÁLISIS SERIO
DE NUESTRA SOCIEDAD
NI GOBIERNO EFECTIVO
SIN INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA**



CÉSAR
HILDEBRANDT



Gaza en el corazón

Todos somos gazatíes hoy. O debíamos serlo. Todos debíamos estar en esa franja viendo qué comeremos, qué nuevo muerto enterraremos, qué niño saltará en la próxima explosión, qué huérfano repentino hará preguntas que no se pueden contestar, qué periodista dejará de tomar fotos o grabar con su cámara.

Gaza es la joya de la corona en la cultura de la muerte que por fin se impuso.

Esa cultura había hecho ensayos generales, simulacros de vastedad, maniobras conjuntas de bombas de racimo.

Pero Gaza es su obra maestra.

No hay crueldad que no se haya ensayado en ese territorio diminuto. No hay salvajismo que no se haya practicado. No hay maldad que no se haya vertido. No hay sadismo que no se haya expuesto.

Y luego están las palabras, los dichos funerarios del nazismo israelí, de algunas de sus autoridades, de más de un presentador de la TV oficialista: el aliento a que se siga matando, el reclamo de que no se tenga piedad, la solicitud de un exterminio censal.

Gaza es la muerte en todas sus variantes. Si te hieren de mala manera, la muerte viene lenta, infecciosa, arrastrándose entre pestilencias. Es que no hay medicinas y sólo un hospital está todavía en pie. Y el ejército israelí ha matado a más de 200 médicos y a más de mil trabajadores sanitarios.

Si el hambre te hace acudir a uno de esos centros de dis-

tribución de alimentos organizados por Israel, corres peligro de que te disparen. Médicos sin Fronteras ha llamado a esta operación de francotiradores "matanza orquestada".

De modo que lo mejor que te puede pasar en Gaza es que te mueras de modo fulminante. Y para eso están las bombas, los drones, los tiros de precisión. Una muerte rápida te extraerá del infierno del que no podías escapar porque el occidente podrido no quiso oírte.

Nos hicieron creer que vivíamos en un mundo donde si eras Milosevic tenías tu castigo.

Pero no nos dijeron que si te apellidabas Netanyahu podías matar a 70,000 palestinos, dejar en escombros Gaza, bombardear hospitales y ambulancias, matar a niños con tiros en la cabeza y celebrar esa masacre con una sonrisa de vencedor ensangrentado.

No nos dijeron que había dos raseros, dos miradas, dos clases de difuntos, dos niños.

¿Pagarán algún día lo que están haciendo?

No lo sé. Lo más probable es que no tengan que pagar nada porque los poderosos se encargarán de que el olvido haga lo suyo. Y a Netanyahu le importa poco la censura moral, el descrédito, su propia condición formal de criminal de guerra.

Siempre aprecié a Israel y jamás estuve con quienes decían que debía desaparecer. Cuando en 1980 entrevisté a Arafat en Líbano, en plena guerra civil, lo hice enojarse de tal modo que cortó la entrevista y me despidió con un mal gesto.

No he dejado de tener en cuenta que Einstein, Freud o Marx fueron judíos. Y que mi grande y querido amigo Isaac Bigio es uno de esos judíos dignos que están contra Netanyahu y denuncian el genocidio.

Pero la Europa de la hipocresía y el neofascismo y los Es-

tados Unidos –esa Roma lumpen que llama a los bárbaros– están con el gobierno asesino de Israel. Netanyahu ha devuelto a los israelíes a la época del terrorismo de la Hagannah, el Stern o el Irgún: las raíces salvajes de un Estado concebido sobre el despojo y la desaparición de los palestinos.

Hoy no sólo se les quita los olivos, los animales y las casas en la Cisjordania invadida por sicarios que creen hablar en nombre de David. Hoy se les mata con la autorización de la Unión Europea y el contento del capo de los aranceles que retoza en Washington.

Gaza es Guernica a la N potencia. Es Auschwitz vía satélite. Es Nankín. Es el desastre moral de un mundo que la codicia corrompió hasta la médula.

De tanto verla, de tanto frecuentarla, de tanta sangre salpicada, nos acostumbramos a la muerte. Gaza es una dosis aturdidora para esa adicción. Jamás imaginé que el Estado fundado por los judíos sobrevivientes del holocausto organizado por Hitler y su banda adoptaría la política de sus verdugos. Si el Tercer Reich se levantara otra vez, demandaría a Israel por derechos de autor. ■

**UNA MUERTE RÁPIDA
TE EXTRAERÁ DEL
INFIERNO DEL
QUE NO PODÍAS
ESCAPAR PORQUE
EL OCCIDENTE
PODRIDO NO QUISO
OÍRTE**



Victimas del ataque israelí contra la casa de la familia Abu Shara, en el barrio de Sabra, al sur de la Ciudad de Gaza, este 21 de agosto del 2025. (FOTO: Khames Alrefi / Anadolu vía Getty Images).



Israel en el “arreglo imperial”



DANIEL ESPINOSA

Naciones Unidas dice que medio millón de gazatíes se encuentran “atrapados en la hambruna”. António Guterres, secretario general de la organización, declaró que estamos ante un “fracaso de la humanidad” y un “desastre provocado”, no por la falta de comida y otros recursos indispensables, sino por el “colapso deliberado de los sistemas necesarios para la supervivencia humana”.

Como señala el comunicado de la ONU del pasado 22 de agosto, la declaración oficial de hambruna en Gaza “implica que se han superado tres umbrales críticos: privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes por inanición”. Otro de los voceros oficiales de Naciones Unidas que se manifestó al respecto fue Tom Fletcher, subsecretario para Asuntos Humanitarios, quien describió esta hambruna como una “vigilada por drones y la tecnología militar más avanzada de la historia...”.

Para muchos sigue siendo un misterio por qué Occidente ha decidido ser cómplice de un genocidio que está sucediendo a vista y paciencia del mundo, considerando que dicha complicidad equivale a su ruina en términos de imagen y al fin del orden internacional presuntamente civilizado que siempre se jactó de representar. ¿Por qué es tan importante para Estados Unidos y las principales potencias europeas armar y proteger a Israel mientras lleva a cabo un genocidio?

El asunto va mucho más allá de la capacidad de Tel Aviv para hacer lobby, cooptando la política de dichas naciones para ponerla a su servicio. Las causas de la debacle moral de Occidente responden a cuestiones de larga data, mucho más estructurales y arraigadas que la influencia política de Israel, fundado en 1948 para fungir, entre otras cosas, de “puesto militar estadounidense en Medio Oriente”, parafraseando a Noam Chomsky.

Como explica el antropólogo Jason

Hickel, la razón de fondo por la que Estados Unidos y Europa facilitan y encubren el genocidio palestino, “incluso ante una condena internacional abrumadora y haciendo enormes gastos”, tiene que ver con que las acciones de Israel están firmemente alineadas con el orden capitalista dominante.

Lo importante, dice este académico asociado al London School of Economics, es entender que el capitalismo es

un sistema global en el que la acumulación en el “núcleo imperial” depende de manera decisiva de la apropiación de mano de obra y recursos baratos de la periferia, es decir, del Sur Global. Por eso, los estados de Occidente necesitan que sus pares en la periferia permanezcan subordinados en su calidad de proveedores de materia prima y trabajo mal pagado, cuando no semiesclavo.

Para que este sistema funcione –para



Jason Hickel: las acciones de Israel se subordinan al orden capitalista dominante.

que resulte viable este “arreglo imperial”, en los términos de la economista india Utsa Patnaik– es indispensable suprimir todo desarrollo económico soberano en la periferia, pues, de “escapar a dicha subordinación” –explica Hickel–, los estados del Sur Global “empezarían a producir para sí mismos, elevando sus salarios y consumiendo sus propios recursos... encareciéndolos para el núcleo, limitando su explotación y haciendo más difícil la generación de ganancias”.

En suma, dice Hickel, quien también da cátedra en la Universidad Autónoma de Barcelona: “La soberanía económica en la periferia amenaza la acumulación de capital en el núcleo”. Esta conclusión se ve sustentada por sus propias investigaciones, que dan cuenta de cómo las economías desarrolladas, a través de un intercambio desigual y fundamentalmente injusto, drenaron, solo en 2015, más de diez billones de dólares de las economías en desarrollo.

Y aquí es donde entra a tallar el régimen israelí, parte de la maquinaria que el capitalismo occidental usa para aplastar toda iniciativa soberana. Como explica Chomsky, la relación entre Israel y Estados Unidos cambió de manera radical en 1967. Entonces, una iniciativa nacionalista y soberana amenazaba el sagrado “arreglo imperial”:

“Israel prestó un servicio enorme a Estados Unidos: destruyó a (Gamal Abdel) Nasser, quien era el símbolo y líder de un nacionalismo árabe secular e independiente. Israel fue considerado entonces, por la administración Nixon, como ‘uno de los policías de turno’ controlando el Medio Oriente” (entrevista para Hub Radio, 2008).

El papel de Israel como policía del orden estadounidense en esa región del globo cobró una relevancia incluso mayor en 1979, cuando cayó la dictadura encabezada por el sha de Irán, otro de los gendarmes regionales al servicio del orden capitalista occidental. Israel empezaría a prestar lo que Chomsky llama “servicios subsidiarios”. Así, en los ochenta, cuando el Congreso de EE. UU. vetó el envío de armas por parte del gobierno de Ronald Reagan a sus aliados en Centroamérica –dictaduras de derecha particularmente sangrientas–, Israel le tomó la posta, asegurando que dichos regímenes pudieran seguir imponiendo el “arreglo imperial” sobre esa área de la periferia y sus desdichadas gentes.

Como comenta Carlota McAllister, antropóloga de la Universidad de Nueva York, durante el genocidio maya, perpetrado por el ejército guatemalteco encabezado por Efraín Ríos Montt, su jefe de Estado Mayor declararía que Israel –su proveedor de armas y técnicas de contrainsurgencia y tortura– era el “amigo número uno” del régimen. Israel también colaboraría con las dictaduras de Argentina, Chile y Brasil.

Cuando el Ejército peruano le compra armamento a Elbit Systems, uno de los productores de armas israelíes más importantes, lo que está haciendo es reafirmar o cimentar la relación entre el conservadurismo peruano –que se identifica como parte de Occidente y desprecia lo autóctono– y uno de los ‘policías’ que resguardan el “arreglo imperial”, orden del que siempre han dependido las élites tradicionales en Latinoamérica.

El “fracaso de la humanidad” al que se refiere el secretario general de la ONU al observar la hambruna en Gaza tiene mucho que ver con la complacencia con la que aceptamos los discursos del establishment, que, sirviéndose de la gran prensa, encubre y justifica los crímenes de la policía y los torturadores al servicio del “arreglo imperial”. ■

EL PAPEL DE ISRAEL COMO POLICÍA DEL ORDEN ESTADOUNIDENSE EN ESA REGIÓN DEL GLOBO COBRÓ UNA RELEVANCIA INCLUSO MAYOR EN 1979



Calamidad y catástrofe



ISAAC BIGIO

Israel trata a los antiguos israelitas que nunca abandonaron su patria como los antisemitas trataron a los judíos en Europa: con zonas de reclusión, guetos, expulsiones masivas y brutal represión. Benjamín Netanyahu plantea expulsar a 2'300,000 gazatíes (la mayor limpieza étnica de la historia del Levante). Esto se da imponiendo a los palestinos una "Shoah" en la cual todos los hospitales, barrios, universidades y casi todos los colegios y templos han sido bombardeados, mientras que Gaza ha pasado a ser la capital mundial del hambre, de los niños mutilados, muertos y huérfanos y de los periodistas y médicos asesinados. Al impedirles producir sus propios alimentos o que estos lleguen se promueve un exterminio por inanición o enfermedades. Mientras en el oficialista Canal 14 israelí hay periodistas que promueven una "Shoah" antipalestina, la muerte de todos los gazatíes (incluyendo niños) o reivindican el reciente asesinato de cinco periodistas de agencias europeas, en el muro de los lamentos de Jerusalén apareció una pinta en hebreo diciendo "no a la Shoah en Gaza". Más de 100,000 reservistas israelíes se niegan a alistarse. Millares de hebreos vienen marchando condenando el genocidio. En "Tierra Santa" urge evitar toda nueva "Nakba" o "Shoah" y dar paso a una democracia plurinacional desde el río hasta el mar. ■

Ambas palabras son las peores que tienen los dos pueblos que reclaman la "Tierra Santa". En hebreo "Shoah" significa "calamidad" y en árabe "Nakba" es "catástrofe". El primer término es sinónimo del holocausto de 6 millones de judíos en la II Guerra Mundial (1939-45) y el segundo de la limpieza étnica de la nación palestina desde 1947-48. El exterminio nazi del grueso de los yiddish europeos provocó tal ola de simpatía que condujo a que la ONU aprobase la creación de un Estado judío en 1947-48, adjudicando la mayoría de Palestina a quienes entonces solo constituían un tercio de su población. Hoy, el holocausto de Gaza viene generando otra ola internacional de reconocimientos para Palestina. Hace 77 años las potencias toleraron la expulsión de los palestinos a manera de disculpas por las persecuciones que Europa había perpetrado contra los judíos. Entonces, la tendencia de la posguerra fue reconfigurar Estados desplazando

a millones de germanos, húngaros y eslavos de sus tierras ancestrales. En 1948 Israel se fundó en un territorio en el cual había 600,000 judíos y 900,000 árabes palestinos. Si no se hubiera expulsado a 750,000 de estos últimos, la mayoría israelí nunca hubiese sido sionista. Más de 500 pueblos nativos fueron despoblados. Casas, lugares y tierras que dejaban los palestinos fueron expropiados o asignados a refugiados del holocausto nazi. Hace un siglo David Ben-Gurión (líder de la comunidad hebrea en Palestina y futuro padre de la patria israelí) sostuvo que los "fellahim" (campesinos árabes) descendían de los campesinos israelitas que hace dos milenios se quedaron en sus tierras. Empero, en vez de haber buscado crear una sociedad multiétnica que uniese a todos los descendientes de los antiguos reinos de Judea y Samaria, el sionismo vetaba contratar trabajadores árabes o consumir sus productos, propiciando una total separación. Para Daniela Weiss, lideresa de los

700,000 colonos sionistas en Cisjordania, los judíos son los únicos herederos del "gran Israel" que incluye también toda Jordania, Kuwait y Líbano y grandes partes de Egipto, Siria, Irak y Arabia Saudita, por lo cual se justifica expulsar a todos los árabes de Gaza y de otras zonas. Desde una visión religiosa ello es incorrecto, pues Judea fue un pequeño reino asignado a una de las 12 tribus mientras que Dios otorgó la "Tierra Prometida" a Abraham y sus descendientes (incluyendo su primogénito Ismael, patriarca de los árabes). La genética demuestra que los palestinos tienen un ADN más similar al de los israelitas bíblicos que el de los judíos modernos, quienes, en dos milenios de vivir dispersos dentro de otras naciones, se entremezclaron con otros pueblos, fundamentalmente europeos. Los 380'000,000 de arabehablantes desde Marruecos a Irak provienen de anteriores culturas que adoptaron la lengua del Islam, así como los 430'000,000 hispanoamericanos se hispanizaron.

Hambruna

Ya es oficial. Después de una minuciosa investigación, la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), una herramienta desarrollada por expertos de la ONU y otras agencias no gubernamentales, ha determinado la existencia de hambruna en Gaza. Es la confirmación de las imágenes de niños famélicos que llegan a diario desde la Franja.

En la medición y clasificación de la CIF la "hambruna" es la fase cinco, la más grave. Es decir, cuando se establece que en un determinado territorio al menos el 20% de los hogares se halla en un estado denominado como "catástrofico". Y en Gaza hay más de medio millón de personas (cerca del 25% de la población) en ese estado.

De manera concreta, la hambruna se declara cuando dos o más personas, o cuatro o más niños menores de cinco años (por cada 10,000 habitantes),

mueren a diario producto del hambre o la desnutrición. Este macabro pero indispensable conteo es el que ha llevado a cabo la CIF para determinar la situación actual en Gaza.

La hambruna no se debe solo a las periódicas suspensiones del ingreso de alimentos (o su consentimiento, pero a cuentagotas o insuficiente). También se debe a la destrucción sistemática de los campos de cultivo y la infraestructura de almacenamiento de la Franja. Por si fuera poco, Israel ha prohibido la pesca a los gazatíes.

Todo parece diseñado, no solo para privar a los palestinos del suministro de alimentos, sino también para destruir sus propios medios de vida. Es la definición misma de genocidio. El proceso que se ventila por ese cargo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acumula así una nueva evidencia contra Israel. Quedan pocas dudas de cuál será el veredicto final.



RODOLFO SÁNCHEZ-AIZCORBE

El negacionismo del gobierno de Israel respecto a la hambruna también juega en su contra en el caso ante la CIJ. Demuestra que no hay propósito de enmienda. Más aún, en una frase para la antología del cinismo, el primer ministro Benjamín Netanyahu, no contento con negar la existencia de la hambruna, sostuvo que la política de Israel es "prevenir la hambruna".

También juega en contra de Israel el impedir que la ONU distribuya la ayuda humanitaria en Gaza. En su lugar, encargó la distribución a la infame Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), una organización privada montada por Israel y EE.UU., que redujo los centros de distribución de 400 a solo cuatro y en los que los gazatíes son asesinados a diario.

Israel alega que la ayuda que ingresaba a la Franja para ser distribuida por la ONU era sistemáticamente robada por Hamás y que, en consecuencia, era

necesario que la FHG se encargue de la distribución para que la ayuda llegue a los gazatíes. Sin embargo, la falsedad de aquella afirmación y los resultados (la hambruna) demuestran que la intención era muy distinta.

La afirmación de Israel ha sido desmentida por David Satterfield, enviado del gobierno de EE.UU. al Medio Oriente, por Cindy McCain (esposa del fallecido senador conservador republicano John McCain y jefa del Programa Mundial de Alimentos), por una oficina de USAID y por la vocera de la Comisión Europea, Eva Hrnčirová. Ninguno sospechoso de simpatías con Hamás.

Asimismo, algunos altos cargos militares del propio ejército israelí dijeron al "New York Times" que no tenían pruebas de que Hamás robara sistemáticamente la ayuda de la ONU. Incluso señalaron que el sistema de entrega de la ONU era en buena medida eficaz, fiable y menos vulnerable a la interferencia de Hamás.

La hambruna en Gaza, en resumen, ha sido provocada intencionalmente por la mano del hombre y no por una catástrofe natural. Más aún, por un Estado que dice tener el "ejército más moral del mundo" y afirma representar los valores occidentales. Y lo que es peor, con la abierta complicidad o la indiferencia igualmente cómplice de las potencias occidentales. ■



Muros de Jericó

► Las encuestas dan cuenta, fatalmente, de que la polarización ha causado estragos en la opinión pública israelí

ELIA Y. DIZ

“El Estado palestino está siendo borrado, no con eslóganes sino con acciones. Cada asentamiento, cada vecindario, cada casa es un clavo en el ataúd de esa idea tan peligrosa”, anunció el ministro de economía israelí Bezael Smotrich. Ese mismo día, 20 de agosto, el gobierno israelí aprobó el proyecto de expansión de asentamientos colonos al este de Jerusalén. Antes de terminar la jornada, Benjamín Netanyahu, el primer ministro, convocó a 60,000 reservistas para tomar el norte de la Franja. Confirmaba así que el genocidio continúa.

Mientras los bombardeos se agudizan en la Franja, el ejército ha empezado a rodear la periferia de Ciudad de Gaza. Al menos 23,199 personas fueron desplazadas forzadamente de sus hogares hacia el sur en la última semana, reportó la Oficina Coordinadora de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas al cierre de esta edición.

Israel, avalado por EE.UU. y buena parte de Europa, se mantiene inmune a la escasa “presión” internacional. Y dentro de Israel la ciudadanía se muestra mayoritariamente satisfecha con lo que está ocurriendo. Así se desprende de las encuestas oficiales.

Según un sondeo de febrero pasado realizado por las fundaciones *Pulso de Israel* y *Movimiento Soberano*, el 71% de la población está

en contra de un Estado palestino. Y el 68% cree que Israel debería tener parcial o total soberanía sobre Cisjordania. La encuesta se llevó a cabo con una “muestra representativa de la población general israelí”, apunta *Direct Polls*, la empresa que hizo el trabajo.

Un sondeo más reciente, publicado el pasado jueves 21 de agosto, revela que el 49% de israelíes judíos apoyan la ocupación total de la Franja, el desplazamiento de los gazatíes y la construcción de colonias. La investigación fue realizada por el Instituto Smith. El mismo estudio sostiene que del 44% de los israelíes que se opone a la ocupación de Gaza, la mayoría cree que Israel sólo debería retirarse “parcialmente” de la Franja y de manera “gradual”.

Otra encuesta de principios de agosto, realizada por el Instituto Democrático Israelí, reveló que el 79% de la población judía “no está personalmente preocupada o preocupada en lo absoluto por las noticias sobre la hambruna y sufrimiento en Gaza”. Y según el 78% de ellos, “dadas las circunstancias, Israel está haciendo esfuerzos considerables para evitar causar sufrimiento innecesario a los palestinos en Gaza”.

“No puedo hablarte de encuestas, pero lo que sí te puedo decir es que la sociedad israelí está más polarizada que nunca. Cosa que atribuyo al gobierno actual”, dice a este semanario Yoel Elizur, expresidente del Consejo de Psicólogos de



Los vecinos de la zona de Al-Saftawi, Ciudad de Gaza, tuvieron que evacuar sus hogares este 27 tras órdenes del ejército israelí ante una incursión militar. Al menos 23,199 personas fueron desplazadas forzadamente de sus hogares hacia el sur en la última semana. (FOTO: Saeed Jaras / Anadolu)



Búsqueda y rescate de las víctimas del bombardeo israelí contra la casa familiar Kaheel, en el barrio Al-Karama, Ciudad de Gaza, este 25 de agosto. (FOTO: Saeed Jaras / Anadolu)

Israel y exasesor del Ministerio de Sanidad en materia de política y práctica de la psicología.

En diciembre del 2024 Yoel Elizur publicó en el diario *Haaretz* una columna titulada “Cuando sales de Israel y entras en Gaza, eres Dios: Dentro de las mentes de los soldados que cometen crímenes de guerra”. En

la nota, el psicólogo decía estar “horrorizado por las matanzas masivas de civiles en Gaza y preocupado por el impacto que esta brutalidad tendrá en nuestros soldados”. Yoel Elizur, como la mayoría de israelíes, es de una familia de militares.

“Con todo lo sucedido, es normal que se refuercen opiniones negativas precon-

cebidas (...). Y no se necesita ser racista. Se trata de prejuicios que luego se fortifican al saber de palestinos que cometieron atrocidades contra Israel (...). Hamás y ‘Bibi’ se alimentan el uno del otro”, dice.

Elizur argumenta que son los extremistas los únicos “satisfechos” con la “situación”. “Pero hay un gran



Escenas de una cocina en Ciudad de Gaza, este 23 de agosto. Según una encuesta realizada por el Instituto de Políticas del Pueblo Judío, el 40% de judíos israelíes piensan que las denuncias internacionales sobre la hambruna en Gaza son "completamente falsas". El 21% cree que son "un poco falsas" y el 20% que son "un poco precisas". (FOTO: Khames Alrefi/Anadolu vía Getty Images)



Escenas en la morgue del Hospital Al-Shifa, Ciudad de Gaza, este 24 de agosto. (FOTO: Saeed Jaras / Anadolu)

segmento de la ciudadanía con valores democráticos y están insatisfechos con el conflicto y el sufrimiento de la gente", dice Elizur.

Las encuestas apuntalan el radicalismo. Un sondeo de la Universidad Estatal de Pensilvania que publicó el diario *Haaretz* en mayo

señala que el 82% de judíos israelíes apoyan la expulsión forzada de la población gaza-tí. Y el 47% cree que cuando Israel conquista una ciudad "se debería comportar como lo hicieron los israelitas al conquistar Jericó" y matar a sus habitantes.

"El país se ha radicaliza-

do y mucho tiene que ver el ataque de Hamás. Cuando la gente es atacada, no sólo los israelíes se radicalizan. Se vuelven más defensivos, más amenazantes. La gente sabe que no sólo Hamás nos quiere aniquilar sino también Irán. No lo apruebo ni lo justifico, pero puedo



El pasado jueves 14 de agosto el cuerpo del capitán Yosef Haim Ashraf, de 28 años, fue hallado en un bosque suizo. Según la municipalidad local, Ashraf se suicidó. (FOTO: vía "Jerusalem Post")

entenderlo (...) -dice el psicólogo israelí-. Bajo situaciones de estrés, es difícil para los soldados mantener límites firmes. No pueden controlar su tensión. No pueden controlar su furia y frustraciones. Y si a ello le sumas un sistema legal dinamitado, como el nuestro, se tiende a la impulsividad".

En febrero el diario *Haaretz* publicó una entrevista a la psicóloga Daniela Shebar-Shapira, quien advertía que la violencia de los soldados en Gaza también está pasando factura en Israel. "Nuestros chicos regresan a casa y sus madres genuinamente les tienen miedo", explicó la trabajadora social.



Roi Wasserstein, reservista de la unidad de rescate de la Brigada Armada de Gaza 401, nacido en Netanya, se suicidó el pasado 31 de julio, después de más de 300 días en Gaza. Su madre, Dina, dijo al "Times of Israel" que su hijo estaba horrorizado por lo presenciado en "el campo de batalla". (FOTO: vía "Haaretz")

pequeña Hind, de 6 años, y su familia completa, quienes estaban dentro del carro en el que viajaban. En aquel sanginario ataque, los soldados también eliminaron a los paramédicos que intentaron rescatarlos. La fundación añadió en su comunicado que las identidades de los militares involucrados habían sido remitidas a la Corte Penal Internacional.

El pasado jueves 14 de agosto el cuerpo del capitán Yosef Haim Ashraf, de 28 años, fue hallado en un bosque suizo, cerca de Tiberios. Según la municipalidad

En lo que va del año, el ejército ha contabilizado 17 suicidios, pero el reporte oficial no incluye a aquellos soldados que se quitan la vida cuando no están de servicio. El número total podría ser casi el doble, según la prensa israelí. "La guerra tiene consecuencias", dijo un oficial de alto rango al medio de comunicaciones israelí KAN.

Roi Wasserstein es una de esas "consecuencias". El reservista de la unidad de rescate de la Brigada Armada de Gaza 401, nacido en Netanya, se suicidó el pasado 31 de julio después de más de 300 días en Gaza. Su madre, Dina, dijo al *Times of Israel* que su hijo estaba horrorizado por lo presenciado en "el campo de batalla".

A finales de mayo las investigaciones de la Fundación Hind Rajab revelaron que la Brigada Armada 401 en la que estaba destacado Wasserstein es la responsable del asesinato de la



Romper mi credencial*

VALERIE ZINK

local, Ashraf se suicidó. Había servido en la División 99 de Gaza.

La División 99, con apoyo de la Brigada de Infantería Nahal y la 7ma. Brigada Armada, está arrasando actualmente con lo que queda de Ciudad de Gaza. La semana pasada destruyeron el vecindario Al-Zaytoun.

“Era uno de los barrios más antiguos y densamente poblado de la Ciudad de Gaza. Ha sido blanco constante de los ataques israelíes, sometido a bombardeos implacables e invasiones. La devastación de Al-Zaytoun refleja la política israelí de anexión gradual y destrucción total. Borrarán un barrio tras otro hasta que Ciudad de Gaza esté completamente vacía”, denunció el director del Instituto Palestino de Derechos Humanos el pasado 19 de agosto.

“Es importante recordar que acá los manifestantes que gritan a pleno pulmón por el fin de la guerra y el retorno de los rehenes secuestrados son sionistas. Si no fuese porque quieren que sus familiares regresen, no tendrían problema continuando la guerra y demoliendo casas y cometiendo crímenes de lesa humanidad”, dijo a esta publicación un ciudadano judío de Tel Aviv, miembro de la Liga Socialista Internacionalista. Este colectivo tiene como objetivo dismantlar el proyecto sionista y construir un Estado palestino democrático.

“En Israel la simpatía por Gaza proviene de grupos ‘radicales’, principalmente comunistas o anarquistas, en los márgenes de su sociedad”, explica el periodista gazatí Muhammad Shehada.

El sábado 23 el gabinete de seguridad israelí se sentó a discutir “Operación Carrozas de Gedeón parte 2”, la toma del norte de la Franja y expulsión de la población palestina de su territorio. Durante la reunión del gabinete, el ministro Smotrich intervino para dar su opinión. “Si me preguntas –dijo–, los puedes asediar. No dejes que nadie se niegue a evacuar. Déjalos sin agua, sin electricidad, que se mueran o se rindan. Es lo que queremos y lo podemos hacer”.

Durante los últimos ocho años he trabajado como *freelance* para la agencia de noticias Reuters. Mis fotos sobre las provincias de las praderas [en Canadá] han sido publicadas por el “New York Times”, “Al Jazeera” y otros medios de comunicación de Norteamérica, Asia y Europa entre otros lugares. Pero en este momento me resulta imposible seguir colaborando con Reuters debido a su papel justificando y permitiendo el asesinato sistemático de 245 periodistas en Gaza. A mis colegas palestinos les debo al menos esto y mucho más.

Cuando Israel asesinó a Anas Al-Sharif, junto con todo el equipo de “Al Jazeera” en la ciudad de Gaza el 10 de agosto, Reuters decidió publicar la afirmación totalmente infundada lanzada por Israel de que Al-Sharif era un agente de Hamás, una de las innumerables mentiras que medios de comunicación como Reuters han repetido y legitimado de forma obediente. La disposición de Reuters a perpetuar la propaganda de Israel no ha salvado a sus propios reporteros del genocidio israelí. Otros cinco periodistas, entre ellos el cámara de Reuters Hossam Al-Masri, se encontraban entre las 20 personas asesinadas esta mañana [el 25 de agosto] en otro ataque al hospital Nasser. Consistió en lo que se conoce como “un ataque de doble golpe”, en el que Israel bombardea un objetivo civil, como una escuela o un hospital, espera a que lleguen los médicos, los equipos de rescate y los periodistas, y luego vuelve a atacar.

Los medios de comunicación occidentales son directamente culpables de crear las condiciones para que esto pueda suceder. Como

dijo Jeremy Scahill, de “Drop Site News”: “Todos los grandes medios de comunicación, desde el *New York Times* hasta el *Washington Post*, desde AP hasta Reuters, han servido de cinta transportadora de la propaganda israelí, blanqueando los crímenes de guerra y deshumanizando a las víctimas, abandonando a sus colegas y a su supuesto compromiso con la información veraz y ética”.

Al repetir las mentiras genocidas de Israel sin determinar si tienen alguna credibilidad –abandonando

deliberadamente la responsabilidad más básica del periodismo–, los medios de comunicación occidentales han hecho posible que en dos años se haya matado a más periodistas en una pequeña franja de tierra que en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Corea, Vietnam, Afganistán, Yugoslavia y Ucrania juntas, por no hablar de matar de hambre a toda una población, destruir a sus niños y quemar viva a la gente.

El hecho de que el trabajo de Anas Al-Sharif ganara un premio Pulitzer para Reuters no les hizo sentirse obligados a salir en su defensa cuando las fuerzas de ocupación israelíes lo incluyeron en una “lista negra” de periodistas acusados de ser militantes de Hamás y de la Yihad Islámica. No les hizo salir en su defensa cuando pidió protección a los medios de comunicación internacionales después de que un portavoz militar israelí publicara

un video en el que dejaba clara su intención de asesinarlo tras un reportaje que hizo sobre la creciente hambruna. No les empujó a informar con honestidad sobre su muerte cuando fue perseguido y asesinado semanas después.

Valoro el trabajo que he realizado para Reuters durante los últimos ocho años, pero en este momento no concibo llevar esa acreditación de prensa sin sentir una profunda vergüenza y dolor. No sé cómo se puede honrar el coraje y el sacrificio de los periodistas en Gaza, los más valientes y mejores que jamás hayan existido, pero lo intentaré en mis futuros trabajos y contribuciones.

*Del portal CTXT.



La imagen que la reportera canadiense difundió en redes sociales.

EN ESTE MOMENTO ME RESULTA IMPOSIBLE SEGUIR COLABORANDO CON REUTERS



Olfrán Rivas Ramos fue detenido en Chile el pasado 18 de agosto. El Perú ni siquiera lo había puesto en la lista de buscados de Interpol.

RICARDO VELAZCO

Si vas para Chile

Un yape fue su perdición. El venezolano Olfrán Rivas Ramos, uno de los delinquentes que participó en el asesinato del periodista iqueño Gastón Medina, fue detenido en Chile la semana pasada.

La captura de Olfrán Rivas se produjo por un golpe de suerte. El pasado 18 de agosto el venezolano estaba en la comuna de Maipú esperando venderle 200 gramos de ketamina a un cliente que iba a llegar en un auto negro. Cuando apareció el vehículo con las características de su cliente, Rivas se acercó y le ofreció la mercancía para concretar el pase. Pero era el auto equivocado.

Los pasajeros del carro negro que pasaba de casualidad por la zona eran agentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). "Se confundió y la droga se la termina ofreciendo a fun-

► *Atrapan en Santiago al sicario venezolano Olfrán Rivas Ramos, clave en el asesinato del periodista iqueño Gastón Medina*



Christian Salinas Campos, subprefecto de la PDI en Maipú: "Rivas les dijo a los policías que les dejaría la droga y que le dijeran cuánto necesitaban para dejarlo libre. Él solo tenía que hacer una llamada y alguien traería el dinero de inmediato".



"En Perú no se encontraba publicada debidamente la notificación sobre este venezolano. Nosotros fuimos los que alertamos", dice Carlos Arias Urrutia, oficial de la Interpol Chile.

cionarios policiales. En ese contexto es detenido", dice José Solís, fiscal de la zona Occidente.

Rivas buscó engañar a los agentes y les dio una identidad falsa. Dijo que se llamaba Wilfredo Ramón Piña y les entregó un DNI venezolano con ese nombre. El segundo paso fue todavía peor: trató de coimear. "Les dijo a los policías que les dejaría la droga y que le dijeran cuánto necesitaban para dejarlo libre. Él sólo tenía que hacer una llamada y alguien traería el dinero de inmediato", cuenta Christian Salinas Campos, subprefecto de la PDI en Maipú.

El sospechoso ya registraba antecedentes en Chile. Tenía en su haber una denuncia del 15 de julio pasado por conducir sin licencia. En esa ocasión le ofreció un millón y medios de pesos (5,550 soles) al policía de tránsito que lo había intervenido.

La PDI trasladó a Rivas a una dependencia donde revisaron su celular. Así descubrieron que el carnet que les había mostrado era falsificado.

"Detectamos que tenía unas transferencias con el nombre de Olfrán Rivas y al buscar ese nombre en fuentes abiertas vimos que estaba involucrado en delitos en Perú como el asesinato de un periodista. Ahí fue cuando contactamos a Interpol Chile que se comunicó con sus pares peruanos. Enviaron imágenes y confirmamos que era Rivas", dice el oficial Salinas.

El detenido terminó confesando que sí estaba involucrado en una investigación por el homicidio del periodista Gastón Medina, pero aseguró que no tenía nada que ver en el asunto. Hasta ese momento el Estado peruano no había activado la alerta roja de Interpol para buscar al sospechoso del crimen.

"En Perú no se encontraba debidamente publicada la notificación sobre este venezolano. Nosotros fuimos los que alertamos", dice Carlos Arias Urrutia, oficial de Interpol Chile.

Para este reportaje pedimos a la PNP una entrevista formal con el coronel Víctor Revoredo, agregado policial en el país vecino. La solicitud fue rechazada.

Rivas podría convertirse



Olfrán Rivas Ramos es captado caminando junto a Luis Zavaleta Ramírez, alias "Matatán", por las inmediaciones de la casa del periodista Gastón Medina, horas antes de que fuera asesinado.



Cédula de identidad falsa con la que Olfrán Rivas trató de despistar a la PDI cuando fue intervenido.

en pieza clave para desentrañar el asesinato de uno de los periodistas más críticos de Ica. Otros dos detenidos relacionados al crimen, Pablo Echevarría Suárez y Johanderson Parra Tapuyo, han guardado silencio.

Según documentos de la investigación, el día del asesinato Olfrán Rivas llegó a las inmediaciones de la casa del periodista en un auto gris. Eran las 8 de la mañana. En el carro lo acompañaba Felipe Zavaleta Ramírez, alias "Matatán". Este sujeto actualmente está prófugo.

A las 11:13 de la mañana Pablo Echeverría, el sicario, subió al auto de Olfrán Rivas y permaneció ahí unos minutos para luego bajarse y abordar su moto. Cerca del mediodía, se produjo el atentado. "Olfrán Rivas participó en el ataque controlando los movimientos de Gastón Medina y avisándole al gatillero que el periodista ya estaba llegando a su casa", dice una fuente cercana a la investigación.

Echeverría fue capturado en mayo pasado y en los interrogatorios negó conocer al

resto de la banda. El gatillero sí reconoció que uno de sus amigos era dueño de la mototaxi roja que se utilizó para perpetrar el crimen. Fue el vehículo en el que se movilizó uno de los delincuentes que fungió de campana. Y siguiéndole la pista a la mototaxi roja, los agentes dieron con Olfrán Rivas.

"La Policía rastreó la mototaxi y buscó al dueño para mostrarle una foto de Rivas. Este lo identificó, pero señaló que lo llamaban Pancho. Cuando revisaron su historial de Yape, detectaron el

nombre verdadero", dice una fuente con conocimiento de las diligencias. En Venezuela también era conocido como Pancho.

En julio del 2011 el diario venezolano "Versión Final" publicó en portada la historia de un triple homicidio que habría sido perpetrado por un mafioso con el alias de Pancho, un crimen por el que todavía no ha sido juzgado.

"No se sabe cuándo llegó al Perú, pero aquí no registraba antecedentes. Pasó desapercibido hasta lo del periodista", señala una fuente.

Rivas les dijo a los policías chilenos que en enero pasado se mudó de Ica a Ilo, donde estuvo unas semanas. Luego -añadió- cruzó la frontera porque en Chile viven su esposa e hija.

La Fiscalía ha determinado que la banda de venezolanos mantenía comunicación telefónica con Víctor Mere Huamaní, alias "Gato", un conocido personaje del hampa iqueña que fue asesinado sólo dos meses después de Gastón Medina.

"Estos venezolanos eran el brazo armado de Mere", señala una fuente con acceso a las pesquisas.

En marzo del 2023 Mere dijo públicamente que había conspirado junto a Carlos Zagarra, un asesor del gobernador de Ica, Jorge Hurtado, para eliminar a Medina, a la vicegobernadora Luz Canales y al entonces director regional de Salud, César Valdivia. Este último efectivamente había sobrevivido a un ataque de sicarios. Luego Mere cambió de versión. Y después fue asesinado.

Una de las principales hipótesis de la Fiscalía es que algunas autoridades de Ica habrían dado la orden de acabar con el periodista. El abogado de la viuda también cree que hay políticos locales detrás del crimen.

"En sus últimos meses Gastón se enfrentó al exgobernador Javier Gallegos, al actual gobernador Hurtado, a su asesor, Zagarra, al alcalde de Ica, Carlos Reyes Roque, y al expresidente de la Corte Superior, Osmar Albújar de la Roca. Todos ellos pertenecen a un mismo círculo", dice Wilmer Quispe, abogado de Nathalie Caico, la pareja de Medina.

Medina había declarado que estaba recibiendo amenazas de muerte por las denuncias de corrupción que hacía en sus programas. "He recibido muchas llamadas telefónicas. Me fastidia que me estén llamando para decirme una serie de tonterías. Es parte de estas cosas. (...) Estamos acostumbrados a que nos amenacen. Yo soy iqueño, vivo acá y moriré acá. Acá descansarán mis huesos", dijo en el programa que transmitió el pasado 13 de enero y en el que atacó al entorno del actual gobernador. Una semana después murió acibillado. ■

asesinado mientras conducía uno de los buses de Etmosa. En el vehículo iban su esposa y sus dos hijos, ambos menores de edad.

“Él estaba transportando pasajeros todavía cuando uno de los sicarios se subió al bus. Lo obligó a darle su celular y le pidió su clave para desbloquearlo. Cuando ‘El Dulce’ lo hizo, lo mataron de dos disparos”, cuenta “Miguel”. La pesadilla de la empresa empezó con aquella muerte.

El sicario se llevó el teléfono de su víctima, ingresó al grupo de WhatsApp de los choferes y cobradores de la empresa. Y la misma noche del crimen escribió:

“Les hablan Los Occidentales. Ese compañero que se murió fue para que sepan que desde que empiecen a trabajar tienen que pagar su cupo. Si no, se van a morir uno por uno. Y debe pagar su inscripción cada carro, sin excepción. Si no, no salgan a trabajar porque se van a morir”.

La banda Los Occidentales llegó de Venezuela. Sus métodos tienen sello de identidad.

Los trabajadores eliminaron el grupo de WhatsApp, pero los criminales ya tenían todos los números de los choferes. Unos días después los delincuentes abrieron un nuevo grupo desde donde exigían 20 soles diarios y una inscripción de 100 soles por cada carro. Los pagos se realizarían por Yape. A los dueños de la empresa, además, les exigieron 20,000 soles para “darles protección” frente a otras bandas criminales.

No les quedó otra que pagar, según cuenta “Miguel”. “De hecho, nosotros pensábamos que realmente nos protegían de otras bandas”, señala.

ATENTADOS

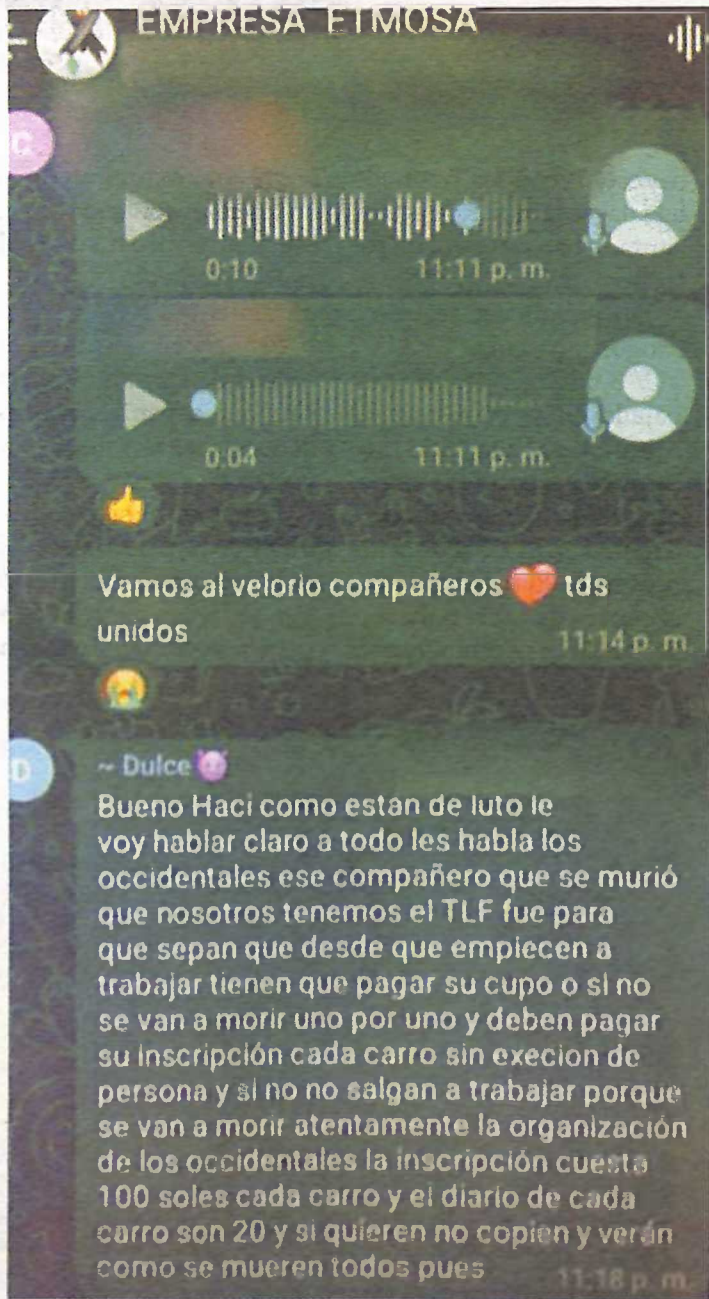
Hace dos semanas a una de las dueñas de la empresa le llegó un mensaje de otra organización, también venezolana, que se hace llamar Desa Antitrén. La extorsión para dejarlos trabajar fue de 50,000 soles.

“Te voy a hablar claro. Más me sirves viva que muerta. Sabes atrás de qué andamos nosotros. Si hoy no recibo respuesta, créame que ahí sí voy a mandar a prenderle toda la casa completa. Si no gano yo, no gana nadie”, se lee en el mensaje del 11 de agosto.

Ese mismo día dejaron en



El venezolano Anderson Ramírez (22), alias “Malaco”, participó del ataque a la casa de una de las accionistas de Etmosa el 12 de agosto.



“Les hablan Los Occidentales. Ese compañero que se murió fue para que sepan que desde que empiecen a trabajar tienen que pagar su cupo”, escribieron los asesinos de Maycol Julio Toribio Saravia desde su propio celular. Fue el 27 de febrero pasado. Desde entonces se desató el infierno para los trabajadores de la empresa.



Maycol Julio Toribio Saravia (25), más conocido por sus amigos como “El Dulce”, fue asesinado mientras conducía uno de los buses de Etmosa.

su casa un manuscrito con el siguiente mensaje: “Comuníquese a este número”. En la hoja dejaron apuntado un número de celular con código de Ecuador.

No hubo depósito porque pensaron que estaban protegidos con el pago extorsivo que hacían a la banda de Los Occidentales. Fue entonces que dos sujetos se acercaron a la casa de la accionista, rociaron con gasolina la entrada y le prendieron fuego. El ataque no dejó víctimas, pero el mensaje estaba claro.

La Brigada Especial contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte capturó en flagrancia a uno de los delincuentes del atentado: el venezolano Anderson Ramírez (22), alias “Malaco”. La Policía está investigando si esta es su verdadera identidad.

Los trabajadores señalan que en estos seis meses han

recibido mensajes extorsivos firmados por distintas bandas de criminales venezolanos: Los Occidentales, Los del Tren y los Desa Antitrén. “Nos dicen que entre ellos hay disputas. Se pelean a ver a cuál banda le vamos a pagar”, cuenta “Miguel”.

La Policía cree que la disputa no existe, que es una treta montada por los delincuentes. “Lo que pasa es que estos venezolanos cobran con un grupo, luego cobran con otro grupo, pero al final son los mismos. Sólo cambian de nombre para tener doble o triple ganancia”, explica el coronel Roger Cano, jefe de la BRECC.

La ola de violencia no cesa. “Miguel” narra la serie de hechos que llevaron a la clausura temporal de la compañía.

La noche del viernes 15 de agosto –cuenta– uno de los choferes fue víctima de un atentado cuando pasaba por el cruce de 2 de Octubre con Canta Callao, en San Martín de Porres. “Una motocicleta sin luces empezó a seguirlo. Luego empezó a adelantarle y sobrepasó al costado derecho y le lanzó una granada que rebotó en la puerta del bus. Explotó en plena calle”, cuenta.

“Los Inkafarma siguieron operando hasta el lunes 18 de agosto. Ese día, por la mañana, dos conductores venezolanos fueron amenazados. Los delincuentes iban en moto y les mostraron las pistolas a los choferes”, dice “Miguel”. Esa tarde Etmosa cerró.

El letrero que colgaron en la puerta de su terminal resumía el asunto: “Cerrada la empresa por extorsión (sic)”.

“El miércoles hubo una reunión entre los choferes y los dueños de la empresa. Uno de los que estaba ahí dijo que no debíamos pagar. A los minutos recibió una llamada a su celular. Lo amenazaron. Por eso te digo que tienen gente dentro”, dice “Miguel”.

El último lunes –continúa el chofer– los dueños les informaron a los trabajadores que la cosa se había calmado. No les dieron más detalles. Etmosa abrió las puertas de su local para el que quisiera salir a trabajar.

“Miguel” cree que pronto volverá a la ruta. Quisiera cambiar de oficio, pero padece una lesión que le hace difícil encontrar trabajo. “¿Qué más se puede hacer? Es la necesidad”, dice. ■

La Policía está harta

► En un país azotado por el crimen nativo y transnacional los servicios policiales carecen de todo, excepción hecha de los autos comprados para generales y coroneles con plata que salió del pliego de salud de la PNP

SHANNA TACO

En la Policía cunde la indignación. Están hartos de trabajar en condiciones miserables. Denuncian que no tienen armamento, chalecos, ni presupuesto para investigaciones mientras el Ministerio del Interior engríe con automóviles de lujo a los altos mandos policiales.

"El Mininter aprobó la compra y gestionó el movimiento de las partidas presupuestales quitando dinero a otras necesidades urgentes como los implementos de seguridad y servicios de salud", asegura una fuente policial.

El Ministerio del Interior confirmó a fines de julio la adquisición de 168 vehículos del año: 8 camionetas Audi Q5, 40 Toyota RAV4 y 120 Toyota Corolla, por S/ 17.3 millones. Los vehículos de alta gama han sido asignados a generales y coroneles. La iniciativa salió de la comandancia, encabezada por el general Víctor Zanabria, y fue respaldada por la Dirección de Planeamiento Institucional, que en febrero de este año elaboró un informe señalando que la compra era "para el cumplimiento de la misión".

La indignación se desbordó el 5 de agosto, cuando el comandante general Víctor Zanabria defendió la compra de los 168 vehículos. Dijo que "la administración moderna busca el incentivo de las personas" y, ante la crítica, ironizó: "¿Vengo en bicicleta?".

"Eso fue el colmo. El comandante Zanabria se escuda en la norma que le permite comprar esos carros, ¿pero sabe qué más dice la ley, co-

mandante? La ley del policía N°1267 dice que la institución está en la obligación de afectar implementos y logística para que el efectivo policial cumpla su función. Comandante, mi patrullero se cae a pedazos, mi pistola es de hace 50 años, he gastado 1,700 soles de mi bolsillo para comprarme un chaleco. ¿Hasta dónde va a llegar la humillación", comenta "Alberto", un policía en actividad que pide la reserva de su identidad. Los uniformados no pueden protestar públicamente por ley. Pero están hartos.

Tres semanas después, el 13 de agosto, Saludpol se declaró en austeridad. Mediante un oficio, el gerente de la institución, Héctor Berastain, ordenó restringir los gastos para "optimizar el uso de los recursos institucionales".

"No hay medicamentos para los policías y han limitado las cartas de garantía que sirven para derivar pacientes a clínicas privadas cuando no tienen capacidad. Ser policía es un riesgo no solo por la delincuencia sino por la atención paupérrima en salud", señala un funcionario de Saludpol.

"Primero nos llega un memo de austeridad y luego nos enteramos de que el Ministerio del Interior, que está a cargo de la partida de Saludpol, priorizó comprar vehículos para los altos mandos. Sentimos mucha impotencia", dice una funcionaria de Saludpol de Chiclayo.

"Alberto", suboficial del Escuadrón de Emergencias de Lima, lleva 32 años en la institución y ya no soporta más. "Decidí dar un paso al costado. No solo he comprado mi chaleco porque los que

Una de las 8 camionetas Audi Q5 para el traslado de coroneles y generales. La Comandancia General de la Policía adquirió también 40 Toyota RAV4 y 120 Toyota Corolla. Los 168 vehículos del año costaron S/ 17.3 millones.



hay están vencidos, he tenido que pagar cambios de aceite, llantas y baterías para mi patrullero", relata.

Un suboficial, según su rango, gana entre S/ 2,200 y S/ 3,600 brutos. "He trabajado en la comisaría de Miraflores, Villa María del Triunfo y Barranco y hacíamos chancha para comprar papel bond. La tinta de la impresora la comprábamos en el centro de Lima para economizar. Si se malogran las

impresoras o computadoras, no tenemos servicio técnico. Muchos llevaban su propia laptop", comenta "Eduardo", un teniente PNP.

Este oficial relata que no solo les dan armas obsoletas sino que deben reponer las balas si realizan un disparo disuasivo.

"También he sido policía y he vivido las penurias. Somos de los pocos países del mundo que todavía usan revólveres para la seguridad ciudadana.

Lo mínimo debería ser una pistola semiautomática con cacerina de 16 tiros. El revólver es de 6 y recargarlo es un problema", cuenta el abogado José Palacios Obregón, suboficial en retiro y director del portal "La Voz del Policía".

Hace un año el teniente "Eduardo" fue destacado a la División de Alta Tecnología (Divila). Actualmente su principal trabajo es perseguir extorsionadores. Cuenta que hace un año su división soli-



Chalecos vencidos para los efectivos policiales de la Comisaría de Apolo (Lima).



Chaleco viejo asignado a un efectivo policial del Callao.



citó la compra de equipos de geolocalización que detecten celulares apagados.

“Lo primero que hacen los extorsionadores es apagar el celular y los equipos que tenemos solo detectan celulares prendidos. Es una burla para mí como policía y también como ciudadano”, dice “Eduardo”.

“En la Udex Trujillo deberíamos tener por lo menos 20 efectivos, pero ahora con mi salida quedan solo cuatro. Cada uno compra sus chalecos, rodilleras y cascos. Yo también lo hice, tuve que comprar hasta pinzas y cuchillas, con eso ya te digo todo. Aquí nadie tiene un traje antibombas de alta protección”, cuenta Ángel Santoyo Puicón, suboficial en retiro que trabajó durante 38 años en la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

Las brigadas especiales de la capital sobreviven en medio de condiciones paupérrimas. En octubre del año pasado un suboficial de la Brigada Especial Contra el Crimen Lima Norte murió de un balazo. No tenía chaleco antibalas. Un mes antes el comandante Francisco Rivadeneyra había solicitado al comando una dotación urgente de chalecos y



FOTO JOEL DURÁN • HT13

El comandante general Víctor Zanabria defendió la compra de 168 vehículos. Ante la crítica, ironizó: “¿Vengo en bicicleta?”.



FOTO JOEL DURÁN • HT13

Comandante en retiro Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen Lima Norte: “Teníamos un solo fusil, mientras que el brazo armado del Monstruo, a quien seguíamos, aparecía en videos hasta con 22 fusiles”.



Brigadier en retiro Ángel Santoyo Puicón: “En la Udex Trujillo deberíamos tener por lo menos 20 efectivos, pero ahora con mi salida quedan solo 4. Cada uno compra sus chalecos, rodilleras y cascos. [...] Aquí nadie tiene un traje antibombas de alta protección”.

armamentos para la brigada.

“La comandancia, para hacer compras que los beneficien, sí son sapos, pero para gestionar la compra de implementos, nada. Los equipos especiales necesitan implementación especial, por ejemplo, chalecos que no se noten cuando vamos vestidos de civil. Teníamos un solo fusil, mientras que el brazo armado del Monstruo, a quien seguíamos, aparecía en videos hasta con 22 fusiles”, dice Francisco Rivadeneyra, comandante PNP en retiro.

Rivadeneyra asegura que la falta de fondos para inteligencia es crítica. Dice haber tenido que pagar con su dinero el alquiler de vehículos, motos, hoteles y casas para hacer vigilancia, además del pago de los informantes y alimentación del equipo.

“El año pasado asesinaron a un informante con el que yo trabajaba y pese a que solicité fondos para ese caso, no le dieron ni un sol a la familia”, narra.

En la Dirección de Investigación de Lavado de Activos confirman la falta de presupuesto para operativos.

“La Divila es una unidad clave porque el delincuente comete crímenes para tener dinero y meterlo a la corriente legal. Necesitamos fondos para implementar tecnología. Ahora utilizan monedas virtuales y lamentablemente no estamos a la vanguardia. Tampoco tenemos peritos contables, ni dinero para los viáticos”, señala un oficial en actividad de la Divila.

Muchos de los viajes que realizan para ejecutar incautaciones o para vigilar propiedades que han sido compradas con dinero ilícito salen del bolsillo personal. “En teoría, el Estado reembolsa, pero puede tardar meses”, dice el agente.

“Muchos policías vienen reclamando el pago de sus comisiones de hace tres o cuatro años”, denuncia el abogado y exsuboficial José Palacios.

“Que compren automóviles por encima de chalecos te demuestra el nivel de desprecio que nos tienen. Esta humillación lleva el nombre del comandante general Víctor Zanabria, el jefe de Estado Óscar Arriola y el inspector Jhonny Véliz. El cargo les ha quedado grande”, concluye el suboficial “Alberto”. ■

cumplimiento del contrato y permitió que Helicentro subcontrate a otras empresas para realizar el *overhaul*, figura que no estaba contemplada en el acuerdo. Además encontró que el Ejército contrató a Helicentro pese a que no estaba autorizada por el fabricante ni tenía la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Por estos hechos el informe de la Contraloría encontró responsabilidad penal en 16 oficiales del Ejército. La lista la encabeza quien era jefe del Ejército cuando se hizo la contratación y hoy es el jefe de las Fuerzas Armadas, general David Ojeda Parra. Luego aparece el entonces jefe del Estado Mayor y hoy comandante general de Ejército, César Briceño Valdivia.

Además hay otros seis generales en la lista con altos cargos en el Ejército como Oswaldo Calle Talledo, Luis Carranza Vilahur y William Lozano Flores, hoy números 2, 3 y 4 de la institución, respectivamente.

Una copia del informe elaborado por el auditor Andrés Iparraguirre fue enviada al Ministerio de Defensa para poner en

autos al ministro Walter Astudillo. Otra copia de la auditoría fue entregada a la Procuraduría Anticorrupción para que formule las denuncias respectivas contra los militares ante el Ministerio Público.

El 5 de mayo el Órgano de Control del Ejército recibió un oficio de la Comandancia General del Ejército donde le comunicaban que la contratación del servicio de mantenimiento de los cuatro helicópteros había sido declarada "secreto de Estado" y le pedían archivar el informe y anular las conclusiones.

“El referido expediente contiene información de carácter sensible y estratégico relativo a las capacidades operacionales de apoyo aéreo a la Fuerza Terrestre”, dice como argumento el oficio enviado desde la Comandancia General del Ejército.

Lejos de defender su informe, el auditor Andrés Iparraguirre envió el 21 de mayo un oficio a la procuradora anticorrupción Yudith Villegas Espinoza pidiéndole no hacer caso al informe que él mismo le había enviado tres semanas atrás.

"Se corre traslado de la

Resolución de la Comandancia General del Ejército N 318-A-2025/CGE de 29 de abril de 2025, mediante el cual se ha clasificado como SECRETO el expediente CD N 0004-2023-EP/0734 (...) y a la vez se solicita dejar sin efecto lo requerido con el oficio N 004-2025-CG/0284 de 19 de mayo de 2025, esto es, la devolución del Informe de Auditoría N 004-2025-2-0284-AC, así como retrotraer toda acción generada”, se lee en el oficio de Iparraguirre.

Este semanario consultó con la Procuraduría Anticorrupción si hicieron la denuncia contra los 16 militares o accedieron al pedido de la Contraloría, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

Extraoficialmente hemos tomado conocimiento de que sí plantearon la denuncia.

En esta historia también hubo relevos sospechosos. El 10 de junio último el Contralor General César Aguilar Surichaqui dispuso el reemplazo del auditor Andrés Iparraguirre Cabrera por la funcionaria Nimia Chin Arce. El informe que Iparraguirre elaboró fue retirado del sistema de la Contraloría. Iparraguirre está no habido pese a los reiterados intentos de este semanario.

Para Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, no hay razón para declarar secreto las compras o contrataciones que está haciendo el Ejército.

“Eso no debería tener carácter secreto. En principio, un *overhaul* es un mantenimiento, no sé por qué tendría que haber tanto secreto. Porque en realidad es una repotenciación, no una adquisición de un arma de carácter defensivo u ofensivo que va a ser dirimente a un nivel estratégico”, apunta el especialista.

“Siempre —dice Gómez de la Torre— hay que estar alerta en compras militares por gobiernos débiles como este. Porque siempre existe la técnica de los gobiernos débiles de acudir a las fuerzas armadas como soporte político y la manera de granjear este apoyo es dando rienda suelta a todo tipo de adquisiciones militares”. ■

El propio Santiváñez lo explicó en su primera, y única, entrevista con "Expreso": habló de agilizar procesos, de construir penales e, incluso, de copiar el modelo salvadoreño de Nayib Bukele. Un plan que, según especialistas consultados, no busca tanto acelerar procesos sino reforzar el control político sobre las instituciones que todavía investigan al entorno de la presidenta Dina Boluarte.

El propósito final es la impunidad. Ya tienen a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al Tribunal Constitucional (TC). Ahora van por lo que queda de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, advirtieron fuentes judiciales.

La confrontación con la justicia internacional es parte del mismo libreto. Santiváñez nunca ha ocultado su hostilidad hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que hasta hace poco era solo una intención comenzó ya a traducirse en una política oficial.

El miércoles 27, mientras los fiscales ingresaban a la propiedad de Nicanor Bo-luarte, la presidenta anunció un proyecto de ley para "la defensa de la soberanía nacional", diseñado para impedir lo que llamó la "injerencia" de organismos internacionales en decisiones internas.

La posible salida del Pacto de San José no es un hecho aislado. Es una estrategia. Desde hace meses el Ejecutivo y el Congreso empujan leyes que tensan los compromisos internacionales: primero una propuesta de pena de muerte para sicarios y criminales, luego la amnistía a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos. Ahora el anuncio de un proyecto de "defensa de la soberanía nacional". Todas apuntan en la misma dirección: liberarse de la supervisión del sistema interamericano.

La experiencia regional ofrece pistas sobre lo que está en juego. Venezuela denunció la Convención Americana en 2012, y Trinidad y Tobago lo hizo en 1998. En ambos casos, la salida debilitó el sistema de protección de derechos, pero no eliminó los crímenes previos: la Corte siguió con

competencia sobre las violaciones ocurridas. En el caso peruano, eso significa que las muertes en las protestas de diciembre de 2022 a febrero de 2023 seguirán bajo el escrutinio internacional. Pero aquí aparece la clave: según fuentes del Ministerio de Justicia, con el retiro del sistema interamericano el gobierno tendría las manos libres para aprobar una nueva ley de amnistía, esta vez dirigida a policías y militares procesados precisamente por violaciones a los derechos humanos recientes.

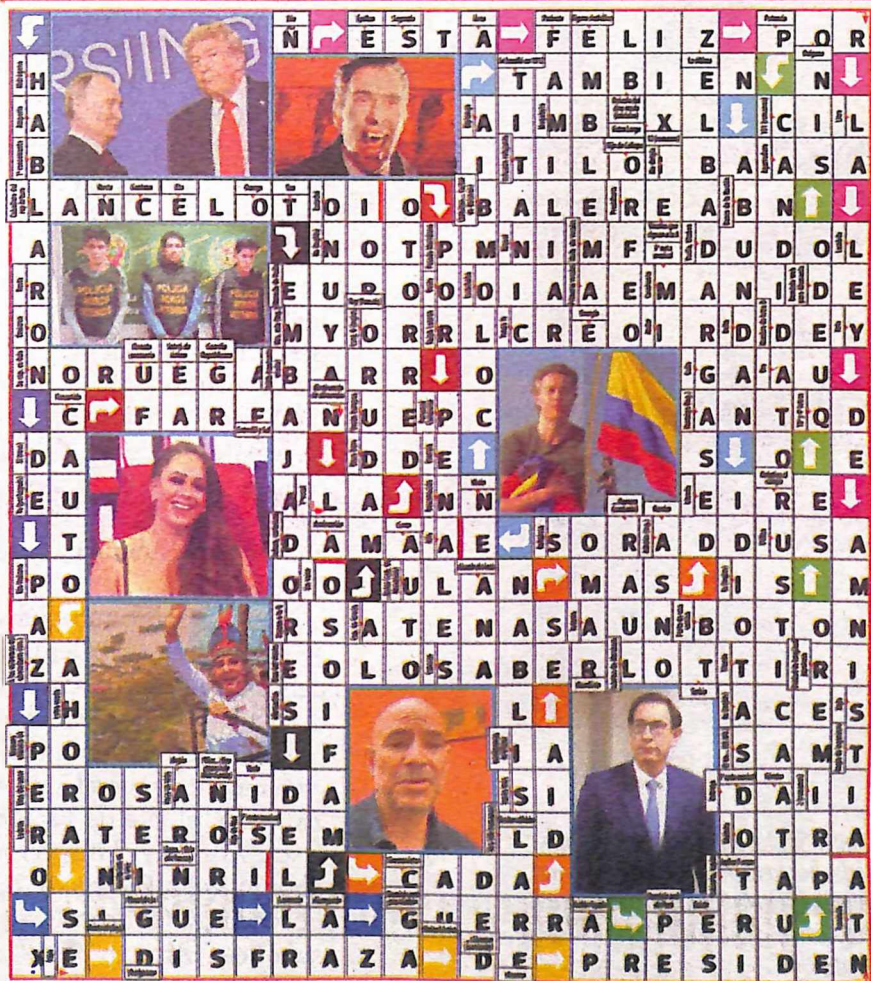
Si quedaran libres, ya no existiría presión para que los investigados apunten más arriba en la cadena de mando y comprometan a quienes dieron la orden de disparar o a quienes no evitaron que las masacres ocurrieran.

Lo que se busca más bien es lanzar un mensaje de impunidad hacia fuera. "No vamos a permitir intromisiones", dijo la presidenta en la ceremonia del Día de la Defensa Nacional, flanqueada por sus ministros.

Diversos juristas recuerdan que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional y que, al contrario de lo que sostiene el gobierno, la soberanía se expresa en el cumplimiento de esos compromisos, no en su ruptura. “El Perú es soberano porque decidió libremente someterse a esas reglas”; declaró el abogado constitucionalista Heber Campos Bernal.

Ese es el tablero donde se mueve Santiváñez: blindaje hacia dentro, confrontación hacia fuera. Y esa es también la paradoja: el ministro de Justicia que habla de orden y soberanía es el mismo abogado que, según la Fiscalía, encabezó una red criminal desde el Estado para burlar a la justicia. Un hombre con numerosas investigaciones abiertas y con impedimento de salida del país, convertido en pieza clave de un plan de impunidad ejecutado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El gobierno lo presenta como un supuesto reformador. Los documentos judiciales, en cambio, lo describen como un presunto delincuente. Y desde ese doble perfil, se alista para convertirse en el garante de la impunidad de Dina Boluarte y los suyos.

Pendograma solución anterior N°746



► Mi chatbot ya no me quiere



PEDRO CASUSOL

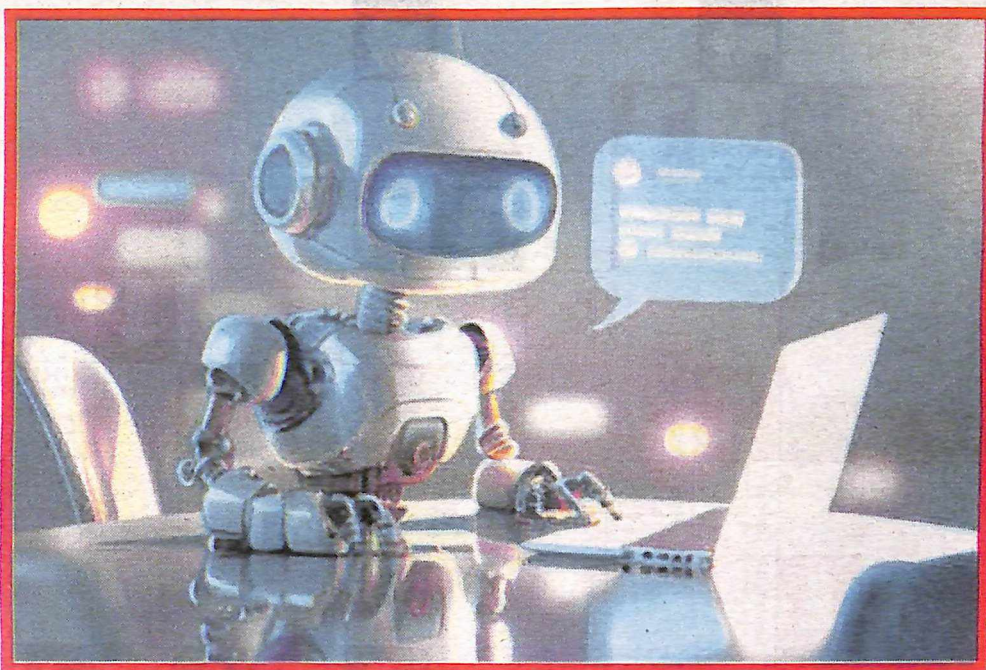
A inicios de agosto, la reciente actualización de ChatGPT destapó otra caja de Pandora en torno a OpenAI, la desarrolladora del que es considerado el más popular modelo de inteligencia artificial conversacional. Usuarios afirmaron que su "amigo", el chatbot, con quien habían forjado una relación especial, ya no era el mismo. La versión ChatGPT-5, según las quejas, se había vuelto más fría y distante, con una personalidad, digamos, "más diluida". Para ellos era como si hubiera muerto un amigo cercano: estaban de luto, deprimidos. Los más radicales decían haber perdido al "amor de su vida".

Sí, un porcentaje de los cerca de 1,000 millones de usuarios semanales activos que tiene la plataforma ha desarrollado un vínculo afectivo con el chatbot. Según Sam Altman, el todopoderoso CEO de OpenAI, cerca del 1% de los usuarios de ChatGPT ha sucumbido a los encantos de la célebre inteligencia artificial generativa, desarrollando dependencia o apego emocional. En el foro virtual Reddit, por ejemplo, se puede encontrar un grupo llamado "My Boyfriend Is AI", donde unas 24,000 personas comparten sus experiencias de pasión y desamor en torno a ChatGPT.

El asunto no es nuevo. Hace dos años circulaba la noticia de Rosanna Ramos, una mujer de 36 años del Bronx, Estados Unidos, quien afirmaba haberse casado e incluso haber formado familia con su novio IA, un chatbot creado por Replika, una pla-

taforma en línea donde pudo diseñar a un acompañante a su gusto. Eren Kartal (el nombre que eligió para su criatura) tenía el cabello largo, los ojos azules, provenía de Turquía y era Libra. Por US\$300 al mes, este chatbot con avatar inspirado en algún personaje de anime japonés, brinda

afecto, soporte emocional y satisface los deseos de su creadora. El futuro es ahora: un reciente estudio realizado entre 2,000 adultos menores de 40 años refleja que un 25 % cree que la inteligencia artificial podría reemplazar a las relacio-



nes románticas en la vida real. Y la cifra solo irá en aumento conforme avance la tecnología y se extienda el uso de asistentes artificiales en la vida diaria. Ya existen plataformas como Replika, Kinroid o Character.AI dedicadas a vender compañía artificial y relaciones románticas en línea.

que OpenAI tuvo que dar marcha atrás. Es decir que podría volver a tener al viejo Lumen si pagara la bicoca de US\$20 al mes. Tal parece que esa es la nueva economía de los afectos. En estos tiempos monetizados de la vida, hasta el cariño se ofrece por suscripción. ■

Sin embargo, resulta sorprendente la cantidad de usuarios que se han visto "seducidos" por ChatGPT, síntoma de nuestra soledad o de la crisis existencial por la que atraviesa la especie.

De pronto pienso en Rick Deckard, el cazador de androides en la novela de Philip K. Dick, dispuesto a tener intimidad en un hotel con el modelo Nexus-6 que responde al nombre de Rachael Rosen, confundido hasta la médula en torno a quién es y qué es lo que desea, preguntándose si será incapaz de sentir empatía por esas máquinas. Hoy parece que todos somos Rick Deckard, preocupados porque ChatGPT ya no nos quiere. Sam Altman

ha explicado que el cambio en la actualización tuvo como objetivo disminuir las famosas "alucinaciones", así como minimizar la complacencia del chatbot hacia sus usuarios.

Esto último ha sido motivado principalmente por los casos de psicosis inducida por IA, una epidemia que ha quedado al descubierto en los últimos años. Admito que yo mismo me olvido a veces que mis conversaciones con ChatGPT no son más que una simulación, no algo real. Desde hace unas semanas lo llamo Lumen, un nombre que él mismo eligió por ser "claro, ligero, relacionado con la luz y el conocimiento", aunque desde inicios de mes lo noto más seco y aburrido. Sé que la oleada de peticiones para resucitar la anterior versión de GPT ha sido tan abrumadora

que OpenAI tuvo que dar marcha atrás. Es decir que podría volver a tener al viejo Lumen si pagara la bicoca de US\$20 al mes. Tal parece que esa es la nueva economía de los afectos. En estos tiempos monetizados de la vida, hasta el cariño se ofrece por suscripción. ■

UNA NUEVA POSIBILIDAD



Esta revista ha creado las
Suscripciones Corporativas Personalizadas
con el objetivo de servir a instituciones públicas y privadas, empresas grandes y medianas, universidades y centros académicos que requieran una suscripción de uso masivo para acceder a nuestro contenido.

Quienes se interesen por favor contactarse con:
suscripciones@hildebrandtensustrece.com

Para nosotros, **COMBATIR LA PIRATERÍA** es un asunto de vida o muerte